



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO

**“LOS PROBLEMAS SOBRE LA INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DEL
CÓDIGO CIVIL EN EL PROCESO CIVIL”**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA

AUTORA:

GIULIANA LUZMARINA GUANILO MONTOYA

ASESOR:

Mg. RAFAEL ALDAVE HERRERA

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

DERECHO CIVIL

TRUJILLO- PERÚ

2015

PÁGINA DEL JURADO



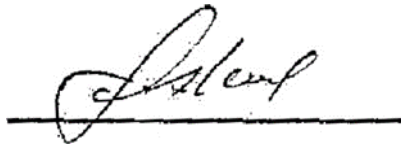
PRESIDENTE

RAFAEL ALDAVE HERRERA



SECRETARIO

HOMERO HONDEC BRIONES



VOCAL

FERNÁNDO ALCÁNTARA CASTAÑEDA

DEDICATORIA

A:

Nuestro creador, por iluminarnos y darnos la capacidad de poder pensar, razonar y cuestionar.

A:

Nuestros padres por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, en toda mi educación, tanto académica, como de la vida. Gracias a ellos, por su permanencia en el tiempo

A:

Nuestros maestros que, a pesar de todos nuestros errores, no se han cansado, y me siguen extendiendo sus manos, para levantarme y seguir. Gracias.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mi Dios Todo Poderoso, por concederme existir en este mundo, darme salud, anhelos y perseverancia.

Agradezco a los míos, por ser mis raíces en este mundo, sin ustedes nada sería posible.

Agradezco a mis queridos maestros universitarios, por la paciencia, dedicación, y empeño para impartir sus conocimientos. Ustedes nos han dado los instrumentos para nuestro camino profesional.

¡Gracias !

Giuliana Luzmarina Guanilo Montota

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD

Yo, GIULIANA LUZMARINA GUANILO MONTOYA, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Cesar Vallejo, con la tesis titulada: “Los Problemas sobre la Interrupción de La Prescripción del Código Civil en el Proceso Civil”.

Declaro bajo juramento que:

- 1. El trabajo de investigación que se presente bajo la modalidad de tesis, es de autoría propia.**
 - 2. Se ha respetado las normas APA para citar adecuadamente las fuentes consultadas y referirlas al final del documento.**
 - 3. La tesis no ha sido auto plagiada, no ha sido presentada antes para obtener algún grado académico previo o título alguno.**
 - 4. Las conclusiones de la investigación son reales, han sido contrastados en la realidad y con las fuentes del derecho.**
- Trujillo, mayo de 2019**



PRESENTACIÓN

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

En cumplimiento de las reglas establecidas en el Reglamento para la elaboración y evaluación de la tesis para obtener el título profesional de abogado, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Cesar Vallejo someto a su consideración el presente trabajo de investigación titulado:

“LOS PROBLEMAS SOBRE LA INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO CIVIL EN EL PROCESO CIVIL”

Esta tesis tiene como objeto fundamental determinar los problemas de los artículos 35 y 36 del Código Procesal Civil, y su impacto sobre la celeridad procesal en el distrito fiscal de la libertad – 2015.

La investigación ha sido reestructurada en cuatro capítulos desarrollados de manera coherente y sistemática, con los cuales se pretende dar a conocer la relevancia de la modificación de los artículos 35 y 36 del CPC mediante la Ley 30293 en la mejora de la añorada celeridad procesal en el distrito Judicial de La Libertad – 2015; por lo que, se deja a vuestra consideración y criterio, señores miembros del jurado, la presente tesis, esperando que el contenido de la misma sea de interés para lograr su finalidad.

Esperamos, en su oportunidad, defender de la manera más adecuada el contenido de la presente investigación. Asimismo, aprovechamos la oportunidad para expresar las respectivas consideraciones a vuestras personas en su calidad de docentes de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas de nuestra casa de estudios.

Trujillo, diciembre 2015

La autora

ÍNDICE

PÁGINA DEL JURADO	i
DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO.....	iii
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD	iii
PRESENTACIÓN.....	iv
RESUMEN.....	iv
ABSTRAC	iv
INTRODUCCIÓN	9
1. Realidad Problemática.....	11
2. Planteamiento del Problema.....	11
2.1. Antecedentes	11
2.2 Justificación del problema	11
2.3. Formulación del Problema.....	12
3. Hipótesis.....	12
4. Variables:	12
4.1 Variable Independiente	12
4.2 Variable Dependiente.....	13
5. Objetivos:	13
5.1 Objetivo General	15
5.2 Objetivos Específicos.....	15
6. Diseño de investigación	16
6.1. Material de Estudio	16
6.2 Métodos y técnicas.....	17
6.2.1. Método	17
6.2.2 Técnicas.....	17
7. Diseño de Investigación	17
II. MARCO TEÓRICO	18
1 Artículo 35 CPC.....	18
2 Artículo 36.....	25
3 Análisis a la corrección mediante la Ley 30293	29
4 Derecho comparado.....	33
4.1 Derecho Brasileño.....	42
4.2 En el Derecho Guatemalteco	50
III. RESULTADOS	52

3.1	Con respecto a los problemas y la incidencia de la modificación de los artículos 35, 36 del Código Procesal Civil, ello mediante la LEY 30093 en los procesos civiles del distrito Judicial de La Libertad – 2017	64
	86	
IV.	DISCUSIÓN.....	65
	CONCLUSIONES	66
	RECOMENDACIONES	67
	Referencia bibliográfica	68
	Revistas.....	68
	Jurisprudencia.....	68
	Normas Jurídicas	69
	Anexos.....	70
	Cuestionario en razón a la modificación de los artículos 35 y 36 del Código Procesal Civil mediante la ley 30293.....	70

RESUMEN

La presente investigación ha tenido por finalidad determinar los problemas de los artículos 35 y 36 del Código Procesal Civil, mediante la Ley 30293.

Como instrumento se utilizó el cuestionario “Modificación de los artículos 35 y 36, mediante la Ley 30293”, con la finalidad de recolectar información sobre la incidencia, aplicación y efectividad de la ley 30293 y el cuestionario “Celeridad procesal por efecto de la modificatoria de los artículos 35 y 36, del CPC mediante la de la ley 30293”. Los resultados nos permitieron hacer las siguientes conclusiones:

- 1) Con respecto al problema de los artículos 35 y 36 del Código Procesal Civil mediante la Ley 30293 en los procesos civiles del distrito Judicial de La Libertad – 2016, se aprecia que nadie los considero no influyentes (0%), un 50% lo consideró medianamente influyente (12 entrevistados) y un 50% lo considero influyente.
- 2) Con respecto a la finalidad de la Ley 30293, la celeridad debido a la modificación de los artículos 35 y 36 del CPC, nuestros resultados muestran que un 4% (1 participante) considera que no es influyente, un 38% (9 participantes) consideraron que es medianamente influyente y un 58% (14 participantes) consideraron que si es influyente.
- 3) Se logró demostrar que Existe relación de los artículos 35 y 36 del CPC mediante la Ley 30293, con un nivel de intensidad media $X^2 = 0.561$, $p = 0.04$.

Palabras Clave: Ley 30293, Celeridad procesal, incompetencia

ABSTRACT

The objective of the present investigation was to determine the relationship between the amendment of articles 35, 36 of the CPC by means of LAW 30293 and the procedural speed in the judicial district of La Libertad - 2016, the sample population was constituted by the justice operators in charge of The administration of civil justice in the Ancash Region constituted by 24 judges. As an instrument, a Questionnaire was used. Modification of articles 35, 36, through Law 30293, purpose: to collect information on: incidence, application and effectiveness of law 30293 and Questionnaire Celerity procedural Of the CPC by means of law 30293. The results allow us to conclude: 1) With respect to the incidence of articles 35, 36 of the CPC by means of LAW 30293 in the civil proceedings of the Judicial District of La Libertad - 2016, That no one considered them to be non-influential (0%), 50% considered it to be moderately influential (12 respondents) and 50% considered it to be influential. 2) The speed of modification of articles 35, 36 of the CPC by means District of La Libertad - 2016, our results show that 4% (1 participant) considered that it is not influential, 38% (9 participants) considered it to be moderately influential and 58% (14 participants) considered it to be influential. 3) was demonstrated the amendment of articles 35, 36 of the CPC by means of LAW 30293 and the procedural speed in the judicial district of La Libertad - 2016 with a mean intensity level $X^2 = 0.561$, $p = 0.04$.

Keywords: Law 30293, Process speed, incompetence

INTRODUCCIÓN

El Derecho es una herramienta indispensable, que ayuda a mantener nuestra vida en orden y en constante regulación; esto viene acompañándonos y reafirmandose a través de los años.

En las sociedades siempre han surgido conflictos entre los ciudadanos, en el ámbito del Derecho Civil se persigue el resarcimiento del daño sufrido por el actor. En el Derecho Civil es posible aplicar la analogía, o sea aplicar las normas a situaciones parecidas a las previstas por la regla legal. Las demandas civiles requieren siempre para ser promovidas que exista petición de parte interesada, pues defienden intereses particulares. La actividad judicial es el ejercicio de un poder que tiene la capacidad para imponer una decisión y hacerla respetar resolviendo así los conflictos que se presentan en la sociedad, mediante la aplicación razonable de las normas jurídicas. La función judicial del Estado busca garantizar la paz social y producir justicia en los casos concretos que son de su conocimiento.

El Derecho tiene, entre sus principales finalidades, el ordenamiento y regulación de la vida social: el Derecho nos dice cómo deben desenvolverse nuestras relaciones sociales y cuáles son las consecuencias que se derivan cuando el Derecho es incumplido o cuando surge un conflicto. Es en este punto donde entra en juego el Derecho Procesal, en las situaciones de conflicto, ya sea intersubjetivo (Torres, 2005).

El Derecho Procesal es una rama del Ordenamiento Jurídico que rige la actuación de los órganos jurisdiccionales y de las partes en el seno del proceso con el fin de la aplicación del Derecho sustantivo al caso concreto cuya resolución se solicita. De forma más breve, como señala Cortés Domínguez, el Derecho Procesal es el conjunto de normas que regula los requisitos y los efectos del proceso, y está formado por normas procedimentales (que regulan el procedimiento) y por normas orgánicas (que regulan la creación y el funcionamiento de los órganos judiciales)

Es conocida la preocupación de nuestra sociedad sobre la sensible imagen que tiene la población del Poder Judicial; se trata de una cuestión que afecta su confiabilidad y en esencia su legitimación social.

Por otro lado, la ley es imperfecta, perfectible o cae en la obsolescencia por el devenir del cambio social y las relaciones jurídicas, motivo por el cual necesita de leyes que la perfeccionen para adecuarla a la realidad actual y a los cambios sociales.

En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico en lo procesal civil, presentaba una imperfección en la calificación de la incompetencia y de sus efectos en el proceso y lo actuado en el juicio, lo cual representaba gastos de recursos de los litigantes y del órgano jurisdiccional, constituyendo sobre todo una problemática administrativos de justicia, que es uno de los derechos fundamentales del ciudadano y obligación primigenia del Estado.

1. Realidad Problemática

Dentro de los años de vida independiente del Perú ha permanecido una constante disposición legal se llama “Ley que modifica diversos artículos del Código Procesal Civil a fin de promover la modernidad y la celeridad procesal”

La Ley anula una barrera de acceso cuando impide que un juez rechace la demanda por incompetencia. Estas practicas han venido dándose a través del tiempo, y son muy graves, debe preverse soluciones, ello sólo será posible con un legislador o poder judicial creador de especialidades dentro de las sub- especialidades. Debe decirse que la justicia especializada ha sido una de las grandes banderas de las mal concebidas reformas judiciales en el Perú. Pero a la fecha, y con todos los desarrollos que se han venido dando en materia Civil, siguen existiendo dudas en establecer quién es el juez competente, para ello ya no se rechaza la demanda, sino que se dispone que el poder judicial resuelva los problemas que muchas veces él mismo creó, facultándose la remisión del proceso al juez que se considere competente. Como en en el caso anterior, o en cualquier otro caso, no se puede predecir si el proceso será más rápido, pero sí que los problemas de estructura y organización de los órganos jurisdiccionales creados por el propio poder judicial no podrán ser usados para rechazarle sus demandas, esto significa una solución rápida, eficiente, diligente y necesaria. (Montoya, 2015).

Como no se había previsto expresamente en 1993 la prejudicialidad, cada juez resolvía (principio de independiente) sin importar que se estaba discutiendo en otro proceso un asunto cuya determinación previa era determinante para resolver la pretensión que debía dictaminar. “No importa, juez resuelve porque es independiente y debe hacerlo rápido porque así llena sus estadísticas; al fin y al cabo, lo importante es que la justicia sea rápida, no importa su calidad”. El ciudadano entonces se encontraba con sentencias contradictorias, procesos resueltos rápido, pero con sentencias ineficaces: el juez sub-especializado estaba ordenando el pago de una obligación establecida en un contrato, que otro juez sub- especializado, meses después estaba anulando. ¿Qué sentencia vale? ¿No es que si se dicta sentencia y esta adquiere la calidad de cosa juzgada, nada la puede modificar? La Constitución establece eso, lamentablemente nuestro legislador no vio venir este problema, no regulando instituciones jurídicas idóneas.

Finalmente, cabe resaltar que, desde diciembre de 2013, existen estudios sobre la medición de su efectividad, sin embargo no se sabe con exactitud y certeza si verdaderamente contribuye a la celeridad de una justicia de calidad/ y con sentido de eficiencia; motivo por el cual, el presente trabajo se orienta a evaluar la problemática de la coherencia entre el texto de la ley 30203 y su aplicación; encontrándonos ante la necesidad de medir la eficacia de la norma en mención, en particular en el Distrito Judicial La Libertad.

2. Planteamiento del Problema

2.1. Antecedentes

En Derecho comparado:

- **En Chile**, La atracción que "Consiste en la acumulación que debe realizarse de los juicios singulares que se sigan contra una persona, al juicio universal que se promueva en caso de que dicha persona fallezca (juicio sucesorio), o sea declarada en estado de insolvencia (juicio de concurso mercantil, si es comerciante, o de concurso civil, si no lo es)"

El punto de quiebre "se presenta cuando dos o más procesos comparten elementos en común, ya sea la causa pretendió o el objeto -en cuyo caso se le conoce como conexidad objetiva-, o bien, litigan las mismas partes -conexidad subjetiva-". El efecto de la conexidad es la acumulación de los procesos que "consiste en la reunión en un solo proceso de todos los juicios que se estaban tramitando separadamente, cuando el fallo de uno de ellos deba producir cosa juzgada en el o los otros; o cuando se cumplan otros requisitos que los Códigos de Procedimiento Civil o Penal se encargan de establecer" Declinatoria de jurisdicción o incompetencia del juez

- **En Perú**, (Chávez Alférez, Otazú Macedo, & Oquiche Ávila, 2016) en su tesis "Modificatorias al código procesal civil – LEY N° 30293", señala que La modificatoria a incompetencia al momento de calificar la

demanda, esto es en la etapa postulatoria, a diferencia de la norma anterior que establecía que esta (incompetencia) podía. El texto actual garantiza la celeridad procesal que antes se veía afectada por la posibilidad de retrotraer el proceso al inicio al declararse la incompetencia transcurridas diferentes etapas del proceso.

El texto actual cumple la finalidad de la modificación, esto es garantizar una mejora en la administración de justicia, por cuanto, antes del nuevo texto la incompetencia determinaba la modificatoria permite una efectiva tutela jurisdiccional, disponiendo que el proceso se remita se le derivó el proceso a su vez, si se considera incompetente lo remita a quien le corresponda; por lo que bajo ninguna razón de incompetencia se declarará la nulidad del proceso.

2.2 Justificación del problema

La investigación se justifica por:

Conveniencia: La novísima ley 30296 entro en servicio 28/01/2015 con el objetivo de mejorar la celeridad procesal. El problema del artículo 35° y 36°, que están entre los que más inciden en la dilación de los procesos, como toda norma, la intención del legislador es la mejor, en su construcción han tenido en cuenta los mejores sustentos doctrinarios, utilitarios y el deseo genuino de mejorar la justicia; logro de sus objetivos no siempre resultan ser los ideales, por lo que es conveniente su evaluación constante para las interpretaciones y correcciones o para mejorar sus criterios de aplicación. Una norma es incompleta si no se mide su utilidad entre los operadores de justicia y los justiciados.

Relevancia Social: El tema de la Justicia, es un tema lapidante en la sociedad peruana, la baja credibilidad, la falta de celeridad, y los múltiples factores que hacen que el nivel de confianza, credibilidad y respeto por la ciudadanía estén venida a menos no solo a nivel internacional, sino internacional, y sea uno de los limitantes para mejorar la calificación de los organismos que miden la competitividad, la idoneidad de inversión, justifican el presente estudio que

aborda uno de los factores para su mejora sean oportunos, midiendo la efectividad de los esfuerzos legislativos ley 30296.

Implicancias prácticas: la presente investigación es de gran implicancia práctica, pues desde los inicios del derecho, su principal paradigma y utopía ha sido plasmar sus ideales, en plazos razonables y en motivación comprendida por los justiciables. En el caso peruano, a diferencia de otras sociedades, estos paradigmas siempre han sido esquivos que han instalado en la población un inconsciente de desprotección y de inalcanzabilidad o en último caso, de que cuando llegue ya de nada valdrá. Al igual que el NCPP. La ley 30296 en un esfuerzo que desde la dimensión legislativa se hace por solucionar esta aspiración popular. En este sentido, este estudio permitirá medir la brecha entre el objetivo de la ley y lo que ha logrado en su reciente año de aplicación.

Valor Teórico: tiene gran valor teórico, porque siendo novedosa y reciente, no existen estudios sobre su efecto en la administración de justicia y como los operadores de justicia encuentran su aplicabilidad, eficacia, eficiencia en la celeridad procesal en el ámbito civil.

Utilidad Metodológica: la presente investigación tiene utilidad metodológica, pues permite configurar variables de estudio adaptadas a la realidad investigada, dimensionarlas y adaptar instrumentos de medición y análisis a fin de que estas variables se puedan medir y analizar y de esta manera tener una idea objetiva, científica y técnica sobre la realidad que se investiga.

2.3. Formulación del Problema

¿Los problemas que existen en el 35 y 36, del Código Procesal Civil mediante la Ley 30293 y la celeridad procesal en el distrito Fiscal año 2016?

3. Hipótesis

Existe algún problema en el 35 y 36 del Código Procesal Civil mediante la Ley 30293 y la celeridad procesal en el distrito Judicial de La Libertad – 2016

4. Variables:

4.1 Variable Independiente

Modificación de los artículos 35 y 36 mediante la Ley 30293

4.2 Variable Dependiente

Celeridad Procesal

5. Objetivos:

5.1 Objetivo General

Identificar los problemas 35 y 36 del Código Procesal Civil mediante la Ley 30293 y la celeridad procesal en el distrito Judicial de La Libertad – 2016.

5.2 Objetivos Específicos

Determinar la incidencia de los 35 y 36 mediante la Ley 30293 en los procesos civiles del distrito Judicial de La Libertad – 2016.

6. Diseño de investigación

6.1. Material de Estudio

- Libros de doctrina extranjera especializada.
- Libros especializados en procesal civil.
- Tareas, investigación relacionados a este proyecto
- Jurisprudencia asociada al tema de investigación.

6.1.1 Población

La población objeto del estudio fueron los operadores de justicia encargados de la administración de justicia civil, que son como se detalla en la tabla.

6.1.2 Muestra

Se han considerado 24

6.2 Métodos y técnicas

6.2.1. Método

Método científico es el que utilizaremos, primero: respecto de los problemas del artículo 35 y 36 modificado por la ley 30293 y segundo en su impacto en la celeridad procesal, relacionando empíricamente estos dos momentos para determinar científicamente si existe asociación entre estos.

6.2.2 Técnicas

Esta técnica permite determinar la aplicación práctica de las normas mediante su frecuencia casuística y el impacto permitiendo validar la utilidad en la práctica para el operador de justicia y el litigante.

7. Diseño de Investigación

El presente estudio tiene diseño correlacional, de acuerdo con, "La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales son saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas".

II. MARCO TEÓRICO

1 Artículo 35 CPC (Texto según el artículo 1 de la Ley No 28544 (16/16/2005). (28544, 2005)

INCOMPETENCIA

La incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, turno y territorio, esta última cuando es improrrogable, se declarará de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, sin perjuicio de que pueda ser invocada como excepción (Texto según el artículo 1 de la Ley No 28544 (16/16/2005).

La competencia es la porción o parte de la jurisdicción de los diversos órganos jurisdiccionales y a la vez, la aptitud de ellos para juzgar determinados asuntos (Calamandrei, 2000).

Por ejemplo, si se aprecia que la pretensión en discusión se refiere a la indemnización por la enfermedad de la neumoconiosis de un ex trabajador minero, dicha pretensión no corresponde a la competencia del juez civil sino al juez laboral; sin embargo, si esta no se advirtió al momento de calificar la demanda ni en el saneamiento procesal, puede el juez luego, en cualquier estado del proceso, declarar su incompetencia porque por regla general la competencia no puede modificarse ni renunciarse porque es imperativa, de tal forma que la vulneración de sus reglas se sanciona con nulidad absoluta e insubsanable (Bocanegra, 2015).

Para configurar la causal precedente, cabe destacar que los jueces previamente antes de resolver un conflicto de intereses deben establecer los hechos aportados en el proceso examinando los medios probatorios. Una vez determinados los hechos con relación a las pretensiones procesales propuestas, tiene que subsumirlos dentro del supuesto táctico del derecho de orden material aplicable al caso concreto; que puede haber sido invocado por el demandante o por el demandado y, en todo caso, por el propio juez en aplicación del principio *pura novit curia* consagrado en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil; por ende, la causal denunciada se contrae al sentido o alcance impropio que se pudiera haber dado a la norma pertinente; no obstante, la impugnante orienta sus alegaciones en pretender que la corte de casación, eleve la pensión alimenticia fijada por la instancia de mérito, lo que, por su acentuado matiz táctico, no corresponde en casación al no constituir una tercera instancia; no siendo atendibles sus alegaciones (Torres, 2005).

Por el principio de congruencia y por lo regulado en el artículo VII del TP del CPC, el juez no puede darles a las partes más allá de su petitorio, ni fundar su decisión en hechos diversos a los alegados por El juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que no han sido alegados por las partes (Reto A. C., 2016).

Es nula la resolución si el juez se pronuncia sobre el mejor derecho a la propiedad, el mismo que no ha sido objeto de la demanda. Dicha controversia debe ser dirimida por COFOPRI .

Resulta imposible que la voluntad del pretensor sea modificada por decisión jurisdiccional, en razón de tratarse de un derecho inherente a la persona como justiciable. No se puede resolver en función de intereses particulares distintos al invocado, situación que reafirma el artículo VII del TP del CPC. La función correctora y supletoria del juez, respecto a la aplicación de la norma responde al derecho discutido, mas no se refiere a la persona que invoca la titularidad del mismo (Sáez Martin, 2015).

El juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar sus decisiones en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes (Carnelutti, Instituciones del Proceso Civil, 2010).

Si se demanda la acción petitoria de herencia, el juez no puede declarará quienes quedan como legítimos sucesores para concurrir a la herencia, pues, ni de la demanda ni de la contestación se ha solicitado ello (Vescovi, 2006)

La resolución del contrato es una sanción derivada por el incumplimiento de las prestaciones; situación distinta a que este haya sido resuelto por acuerdo de las partes y luego se pretenda el cumplimiento de ese acuerdo. Ello importaría modificar el petitorio, lo que constituye un Imposible jurídico, a tenor del artículo VII del TP del CPC (Civil", 2015)

El objeto del acto jurídico se entiende como el resultado que las partes esperan obtener con el acto.

Si el fin del acto jurídico, es el mutuo con garantía hipotecaria, la intención oscura de alguna de las partes no puede analizarse desde ese punto, porque las causales de dolo, fraude, engaño, ardid y simulación, son causas de anulabilidad respecto de las cuales no cabe pronunciamiento, porque implicaría modificar el petitorio de nulidad que se demanda, en transgresión del artículo Vil del TP del CPC (Cooperación, 2016)

El juez en la motivación de su sentencia debe invocar el derecho que corresponde a la pretensión y no el señalado erróneamente por las partes.

El juez no puede ir más allá del petitorio. No se puede ordenar en ejecución de sentencia se comprenda dentro de la independización y reglamento interno, las cocheras, que no

obstante corresponder al inmueble de Litis, provienen de otro título distinto al que ha sido materia de este proceso (Torres, 2005)

La elección de la pretensión corresponde al sujeto activo de la relación procesal, quien es el obligado a puntualizar Inequívocamente la acción que escoge; en tanto, el juez no puede sustituirlo ni menos ir más allá del petitorio. (Vescovi, 2006)

Es nula la sentencia si el juez al dictar la misma procede a la liquidación de la sociedad de bienes gananciales sin que haya sido solicitado por las partes. El juez no puede ir más allá del petitorio (Vescovi, 2006).

Así como ya se ha dicho, y esto lo expresa la doctrina procesal con más reconocimiento, “el juez puede suplir el derecho no invocado, pero no le está permitido suplir los hechos, cuya exposición y prueba corresponde a las partes, a cuyo cargo serán las consecuencias de su omisión o negligencia”.

Si bien la recurrida en forma ambigua y contradictoria señala primero, que la cambial no cumple con el requisito del protesto, como si se tratara de una acción cambial, sin embargo, contradictoriamente señala a continuación que el actor no ha acreditado la relación subyacente, dando a entender que se trata de una acción causal; en todo caso, debe interpretarse que la recurrida ha calificado la pretensión como una acción derivada del título valor, es por ello que ha declarado improcedente la demanda, con lo cual ha devenido el fallo impugnado en incongruente por exceso, en tanto se ha resuelto una cuestión no planteada en la etapa postulatoria (Reto A. C., 2016).

Se tiene que dejar en claro, para que no se preste para ambigüedades, ello es: “la omisión de aplicar dicho precepto no acarrea la nulidad. Que quede claro, que no existe nulidad, una vez que se haya realizado la subsanación del vicio, y este no ha de alterar el sentido de la decisión”

El juzgador carece de facultad para sustituir o modificar los hechos que sustentan la pretensión.

1.1 NOCIÓN DE LA COMPETENCIA

"Si fuera factible pensar, aunque fuera imaginativamente, acerca de la posibilidad de que existiera un solo juez, no se daría el problema a exponer ahora, puesto que jurisdicción y competencia se identificarían". nulo (Carnelutti, Instituciones del Proceso Civil, 2010).

1.2 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMPETENCIA.

"solamente si está fijado antes de cada procedimiento con base en regulaciones abstractas, qué tribunal y qué juez es competente, se puede enfrentar el peligro de decisiones arbitrarias. Un firme régimen de competencia crea seguridad jurídica. El demandante sabe a qué juzgado se puede o debe dirigir con su demanda. El demandado en todo caso se puede preparar, en qué lugar eventualmente debe contar con demandas" (Jurídica, Fundamento Constitucional de la Competencia , 2015).

1.3 CARACTERES

1.3.1 Es de Orden Público.

La competencia es un instituto de orden público en la medida que los criterios para asignarla se sustentan en razones de interés general (Zevallos, 2015).

Asimismo, nosotros consideramos que la competencia es de orden público por dos razones adicionales:

- (i) supone el desarrollo o actuación de un derecho fundamental (Juez Natural);
- y
- (ii) sus reglas determinan el ámbito dentro del cual se ejerce una potestad asignada constitucionalmente a un órgano del Estado.

1.3.2 INDELEGABILIDAD.

Ahora bien, lo anteriormente dicho no quita que, en algunos casos, un juez pueda comisionar la realización de algunos actos procesales a otro.

Este fenómeno se conoce como: “el instituto de la comisión”, y, no supone una delegación de competencia, sino sólo el encargo que recibe un juez de otro para realizar algunos actos procesales que, por razones fundamentalmente de orden práctico/ practicidad, el juez que comisiona no puede realizar. La comisión no es por ello una obligación del Juez, sino una facultad y así ha sido expresamente regulado en nuestro Código Procesal Civil (Civil", 2015).

Así, y para que se ilustre y este sea entendido con más amplitud, por ejemplo: “una diligencia a realizarse en una localidad distinta a la que se encuentra el Juez que conoce el proceso puede (no debe) ser comisionada a otro Juez (ubicado en la localidad donde debe realizarse la diligencia) debido a que, si el primero se traslada al lugar donde debe realizarse la diligencia, desatenderá sus deberes en los demás procesos que conoce.” Debe tenerse en cuenta que la razón de la comisión no radica en el hecho que el Juez que conoce el proceso no es competente para realizar actos procesales derivados del proceso que conoce (y respecto del cual sí es competente) en otro distrito judicial, sino en una cuestión meramente práctica, esto como ya lo hemos dicho, solo significa una “encargatura”. Por ello, el instituto de la comisión no tiene que ver en realidad con un problema de competencia, sino con la colaboración y facilitación del ejercicio de la potestad jurisdiccional, esto a efectos de practicidad, y de aceleración.

1.3.3 INMODIFICABILIDAD O PERPETUATIO IURISDICTIONIS

1.3.5.1 NOCIÓN.

Sobre competencia vigentes al momento del inicio del proceso.

La primera de las soluciones es una opción de "inequívoco sabor penalista” porque se establece un paralelismo con la irretroactividad de las normas penales materiales respecto de la comisión del delito.

Esta solución supone una confusión entre el objeto de regulación de las normas procesales y el de las normas materiales (Piña, 2002).

Nuestro viejo Código Procesal Civil, parece haber recibido la influencia de las dos posiciones ya existentes, y apenas descritas, lo que se refleja en la contradicción que aparentemente existe entre sus artículos 8 y 438 inciso 1.

En nuestra opinión, el proceso se inicia con la interposición de la demanda y, es éste el momento de determinación de la competencia; por lo tanto, una vez ya determinada, ésta no puede ser modificada. Esta es la única manera como se garantiza el derecho al Juez natural el mismo que consiste, precisamente, en que el proceso sea conocido por el Juez predeterminado, es decir, por el Juez que las leyes vigentes al momento de la interposición de la demanda establecían como competente (Rimonte, 2014). Predeterminado no puede ser el Juez previsto como competente por las leyes vigentes al momento del emplazamiento, pues entre la interposición de la demanda y el emplazamiento se pueden producir aquellas modificaciones de la competencia que el derecho constitucional al Juez natural quiere evitar a fin de garantizar la imparcialidad e independencia de los jueces (Reto L. d., 2015).

1.3.5.2 APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO.

El principio que rige la aplicación de las normas procesales en el tiempo es el de aplicación inmediata de la norma, de modo que la nueva norma se aplica, incluso, a los procesos en trámite. Sin embargo, dicho principio no se aplica cuando la nueva norma modifica la competencia, ya que el principio de la *perpetuatio iurisdictionis* (como manifestación del derecho al Juez Natural) prevalece al principio de aplicación inmediata de la norma procesal. De esta forma, podemos decir que, si bien las normas procesales se aplican de manera inmediata/ con la mayor celeridad, incluso a los

procesos en trámite, ello es así, salvo que la nueva norma sea una que modifica la competencia, pues en estos casos prima el principio de inmodificabilidad de la competencia, rigiéndose la competencia por la norma anterior, es decir, por aquella que estuvo vigente al momento de la interposición de la demanda. Ésta es la solución por la que ha optado nuestro Código Procesal Civil, y la cual esta tesis también respalda como idónea.

1.3.5.3 ¿SE ADMITE O NO EXCEPCIONES?

Hasta ahora hemos venido diciendo que el derecho al Juez natural dispone, entre otras cosas, que el Juez que conoce un proceso debe ser el predeterminado por la ley. De esta forma, la competencia se determina en función de las circunstancias de hecho y de derecho existentes al momento de la interposición de la demanda, sin que los cambios producidos en ellas puedan afectar a la competencia ya fijada, todo esto en aplicación del principio de la *perpetuatio iurisdictionis* (Zevallos, 2015).

Quizá, sólo sea posible admitir una excepción a este principio, y como bien lo dice como algo extraordinario- no regular, en aquellos casos en los que el conocimiento del proceso por el Juez predeterminado por la ley pueda afectar su imparcialidad. Como hemos dicho, la in- modificabilidad de la competencia tiene como finalidad garantizar la independencia e imparcialidad del Juez; por ello, si por alguna razón (causas de conmoción social, por ejemplo) la imparcialidad del juez predeterminado por la ley está en juego, puede procederse a la modificación de la competencia. Esta excepción precisamente surge para garantizar aquello que la propia regla protege: e imparcialidad de los jueces (Jurídica, Reglas Generales de Competencia, 2012).

Por ello, cuando se entiende que el derecho a un Juez natural supone el derecho a un Juez "predeterminado", ello quiere decir que una vez establecido éste no puede modificarse. La claridad del mandato

contenido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución es bastante claro y, no admite excepción alguna, cuando se señala que ninguna persona puede ser desviada de la "jurisdicción predeterminada por la ley (Aguirre Godoy, 1981).

1.4 COMPETENCIA.

Hemos venido diciendo que la competencia es la aptitud que tiene un juez para ejercer válidamente la función jurisdiccional. Esa aptitud está dada en función de determinados criterios conforme a los cuales se asigna competencia.

- COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA FUNCIÓN.

Leible "en la competencia funcional se trata de la distribución de diversas obligaciones jurisdiccionales en una causa a diversos órganos de la jurisdicción" (Leible, 2015).

"La competencia funcional es la atribución a cada uno de los órganos jurisdiccionales que han de ejercer su potestad en un determinado proceso de cada una de las específicas funciones que, a cada uno de ellos, corresponde realizar en ese proceso".

Así, por ejemplo, si un proceso se lleva ante el Juez de Paz, los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones expedidas por él, serán de conocimiento del Juez Especializado en lo Civil. De otro lado, si un proceso se lleva ante un Juez Especializado en lo Civil, los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones expedidas por él, serán de conocimiento de la Sala Civil de la Corte Superior respectiva.

La competencia funcional horizontal supone una asignación de atribuciones establecidas en la ley respecto de diversas fases del proceso (como, por ejemplo, si la ley estableciera que la ejecución de una sentencia le corresponde a un juez distinto de aquél a quien la dictó y conoció del proceso) o, la atribución del conocimiento de un incidente o un aspecto relacionado al proceso a un órgano jurisdiccional distinto a

aquél que conoce el proceso. En este último caso se trata de un incidente no originado a consecuencia de la solicitud de un doble conocimiento de una misma decisión, de lo contrario, nos encontraríamos ante un supuesto de competencia funcional vertical, sino, de un incidente que, aunque, asignado a un órgano superior, le corresponde a él su conocimiento porque así lo establece la ley. Un ejemplo de esto último puede ser la competencia que se le asigna a la Sala Civil de la Corte Superior respectiva para conocer del conflicto de competencia producido entre dos órganos del mismo distrito judicial o, la asignación de competencia que se le da a la Sala Civil de la Corte Suprema para conocer del conflicto de competencia producido entre órganos jurisdiccionales de distritos judiciales distintos.

✓ JUSTIFICACIÓN DE ESTE CRITERIO.

"Puesto que la justicia exige gastos tanto más graves cuanto más numerosas sean las personas que integren el juzgador y cuanto más complicado y largo sea el procedimiento, se ha reconocido la conveniencia de hacer que a las causas de menor importancia económica respondan órganos judiciales más simples, que permitan una mayor economía de personas y de tiempo, y reduzcan el costo del proceso a una medida que no parezca desproporcionada con el valor de la causa"

Respecto de todos y cada uno de los sistemas anteriormente descritos se pueden formular críticas, pues todos ellos tienen ventajas y desventajas; el caso es que, siendo la cuantía un criterio objetivo de determinación de la competencia "debe negarse, por consiguiente, cualquier importancia a otros factores de carácter personal y subjetivo. Así, no podrá tenerse en cuenta la valoración personal y afectiva de determinado sujeto "

Ahora bien, el Código Procesal Civil ha recogido el primero de los sistemas, es decir, aquél según el cual la cuantía se determina en función de lo que el demandante ha afirmado en su demanda, aun

cuando admite que el Juez puede corregir la cuantía expuesta por el demandante sólo si aprecia de lo expuesto por el propio demandante (sea de la demanda o de los anexos de ésta) que ha habido un error en la determinación de la cuantía. Es importante anotar que ello no quiere decir que nuestro Código haya optado por el segundo sistema, sino que mantiene el primero de ellos, lo que ocurre es que permite al Juez realizar una especie de corrección del valor de la cuantía expuesto por el demandante en función de lo que el propio demandante señala o adjunta como anexos. Siempre son la declaración y los documentos que adjunta el demandante, los que son determinantes para la determinación de la competencia, por razón de la cuantía (Civil", 2015).

Ahora bien, nuestro Código Procesal Civil establece algunas reglas para la determinación de la cuantía, las mismas que procedemos a describir a continuación:

1. Para calcular la cuantía se suma el valor del objeto principal de la pretensión, los frutos, intereses y gastos, daños y perjuicios y demás conceptos devengados al momento de la interposición de la demanda, no los futuros (Carnelutti, Instituciones del Proceso Civil, 2010).

- **COMPETENCIA POR RAZÓN DEL TERRITORIO.**

(Calamandrei, 2000) Siendo ello así, la competencia por razón del territorio se establece en virtud de diversos criterios que tienen que ver, fundamentalmente, con la vecindad de la sede del Juez con el objeto, personas o demás elementos del conflicto de intereses.

Ahora bien, es necesario hablar de estos diversos criterios para la determinación de la competencia territorial. Los cuales con el tiempo han ido siendo conceptualizados, recibiendo la denominación de "fueros" y siendo clasificados como:

- ✓ **FUERO PERSONAL (FORUM PERSONAE).**

(Carnelutti, 2010). De esta forma, lo que normalmente ocurre es que las partes del proceso tengan domicilios distintos, en cuyo caso habrá

que observar el domicilio del demandante y del demandado y definir entre ellos qué juez es el competente. Esta definición está dada por una regla general de competencia, denominada *forum rei*, según la cual es competente el Juez del lugar del domicilio del demandado; regla que se encuentra recogida en nuestro Código Procesal Civil en más de una oportunidad.

(Carnelutti, Instituciones del Proceso Civil, 2010) Según este criterio, la competencia se determina atendiendo al lugar donde se encuentra el bien en litigio. Este criterio para establecer competencia tiene su justificación en el hecho que se desea aproximar al Juez a los elementos del conflicto y, en concreto, al lugar en el que se ubica el bien respecto del cual se discute en el proceso. Este criterio es de aplicación sólo en el caso en que se discuta sobre derechos reales sobre inmuebles.

✓ **FUERO CAUSAL.**

Este criterio se refiere, independientemente de la ubicación de las personas o del bien discutido, al lugar donde se produjo el hecho que constituye el fundamento de la pretensión. De esta forma, se hace una distinción entre *fórum obligationis* (lugar donde surge la obligación o donde se produce la causa de la obligación) y *fórum executionis* (lugar donde debía ejecutarse la obligación) (Calamandrei, 2000).

✓ **FUERO INSTRUMENTAL.**

Este criterio establece el Juez competente atendiendo al lugar donde la ley presume que se encuentra o se puede encontrar el mayor material probatorio para resolver una controversia (Bocanegra, 2015).

✓ **COMPETENCIA FACULTATIVA.**

Los criterios enunciados anteriormente no son necesariamente excluyentes, pues si bien la regla general en la competencia por razón del territorio es el *fórum rei*, en algunos casos la ley le concede al demandante la facultad de demandar ante un Juez distinto al del lugar

del domicilio del demandado; juez que se encuentra igualmente habilitado (es competente) para conocer el proceso. Los casos de competencia facultativa se encuentran expresamente previstos en el artículo 24 del Código Procesal Civil.

- **COMPETENCIA POR RAZÓN DEL TURNO.**

La competencia por razón del turno es un criterio de asignación de competencia que tiene que ver con la distribución del trabajo entre los diversos tribunales. De esta manera, el Poder Judicial determina los criterios de asignación de procesos a los diversos jueces a fin de garantizar el ordenado ingreso de procesos a un determinado despacho.

1.5 PRÓRROGA DE LA COMPETENCIA.

Como hemos explicado anteriormente, por regla general, la competencia es improrrogable, salvo la competencia por razón del territorio. Por ello, todo lo que en esta sede se indique se referirá a este criterio de determinación de la competencia y siempre que no exista ley que establezca que, en un específico supuesto, la competencia territorial sea improrrogable (Reto, 2016).

La prórroga de la competencia o competencia por elección, como la llama un sector de la doctrina, (Reto L. d., 2015) "se funda en la convicción de la utilidad que puede tener el acuerdo de las partes como índice de la idoneidad, respecto del litigio, de un oficio diverso del determinado según las normas de la competencia principal".

De esta forma, la ley permite que, respecto del territorio, las partes puedan establecer una competencia distinta a la prevista en la ley. La razón de que sea la competencia por razón del territorio aquella respecto de la cual se pueda pactar se debe, según Calamandrei, a que normalmente esas reglas son establecidas en interés de las partes, siendo ello así, ellas pueden, con un acuerdo, establecer una competencia distinta a la prevista legalmente. (Bocanegra, 2015)

Ahora bien, algo que debe tenerse en cuenta es el hecho que la prórroga de la competencia requiere siempre de la voluntad de los dos sujetos, no bastando para ello que sólo uno manifieste su voluntad en ese sentido (Vescovi, 2006).

El acuerdo respecto de la competencia puede concluirse antes o después de nacido el conflicto de intereses. En función de ello, este acuerdo puede ser:

- **ACUERDO PREVENTIVO (ANTE LITEM NATAM).**

Es un acuerdo de prórroga al que llegan las partes antes del surgimiento del conflicto, estableciendo ante qué juez se llevará a cabo el eventual proceso que se inicie en caso surja algún conflicto entre ellas. (Espinoza Espinoza, 2007)

Este acuerdo se produce normalmente como una cláusula dentro de un contrato (cláusula de competencia). La cláusula de competencia debe ser realizada por escrito, no siendo importante al efecto que el acuerdo conste expresado en un mismo documento o en más de uno; siendo suficiente que la declaración de voluntades concurrentes conste por escrito (es el caso, por ejemplo, de dos partes que expresan su voluntad en sendas cartas cursadas entre ellas). (Cortez Martínez, 2011)

Cabe precisar que este acuerdo no forma parte del objeto del contrato, sino que se hace con ocasión del mismo. (Espinoza Espinoza, 2007)

Ahora bien, este acuerdo es necesario, ya que, a través de este, las partes pueden ampliar la competencia establecida en la ley o derogar la competencia principal. En el primer caso, las partes establecen, adicionalmente a la competencia del Juez prevista legalmente, otro ante el cual podrían demandar. En el segundo caso, las partes establecen que el Juez establecido en la ley no será el competente, sino que lo será aquél que las propias partes pacten. Para que esto último sea posible, se hace necesario que conste expresamente y de forma espontánea la voluntad de las partes, en el sentido que la competencia atribuida por ellos en el acuerdo es exclusiva. (Espinoza Espinoza, 2007)

Lo que hemos referido en las líneas precedentes, guarda relación con lo que expresa la doctrina: "El acuerdo vale para atribuir competencia al Juez elegido, no para privar de competencia al Juez elegido según ley; pero si en el acuerdo expreso se atribuye al Juez elegido competencia

exclusiva, el Juez designado por la ley no es competente". (Espinoza Espinoza, 2007)

Ello quiere decir que, si en el acuerdo de las partes no se ha establecido con absoluta claridad que la competencia que se asigna es exclusiva, la competencia por ellas acordada es una competencia adicional a la prevista en la ley constituyéndose, entonces con este acuerdo, una competencia facultativa, donde el demandante puede elegir entre el Juez previsto en la ley como competente o el previsto por las partes en el acuerdo (Reto L. d., 2015).

Finalmente, debe tenerse en cuenta el hecho que, a pesar que las partes hayan pactado que un determinado Juez es el competente (sea ampliando la competencia o sea derogando la legalmente establecida), si el demandante demanda ante un Juez diverso al pactado y, el demandado no cuestiona la competencia oportunamente, se puede producir una prórroga tácita de la competencia. Este tipo de prórroga está regulado en el artículo 25 del Código Procesal Civil. (Carnelutti, Instituciones del Proceso Civil, 2010)

- **ACUERDO SUCESIVO (POST LITEM NATAM).**

En este caso el acuerdo se produce luego de surgido el conflicto de intereses. El acuerdo puede ser expreso o tácito. (Carnelutti, Instituciones del Proceso Civil, 2010)

- **ACUERDO SUCESIVO EXPRESO.**

Es prácticamente normal decir que en un acuerdo de prórroga al que llegan las ambas partes luego del surgimiento del conflicto, determinando ante qué juez o sala se llevará a cabo el eventual proceso que se inicie para resolver el conflicto entre ellas. Así lo explica la doctrina: "(...) puede ocurrir, aunque la hipótesis sea muy rara que, nacido el litigio y antes de que las partes lo lleven al proceso, se pongan de acuerdo,

mediante declaraciones recíprocas, para someterlo a juicio de un oficio que no tendría competencia (...)"

Es necesario que se señale, que, a este tipo de acuerdo, podría aplicarse lo expuesto para el acuerdo preventivo.

- ACUERDO SUCESIVO TÁCITO.

Suele tener efectos en aquellos casos en los cuales: como primer lado, el demandante interpone su demanda ante un Juez, quien de acuerdo a las normas (estas son de competencia) no sería el competente, y como segundo lado el demandado (habiendo sido válidamente notificado) deja pasar el plazo ya establecido en la ley para poner en cuestión su competencia (Reto L. d., 2015).

Este tipo de prórroga, lo podemos encontrar previsto en el artículo 26 del Código Procesal Civil.

1.6 LA COMPETENCIA POR CONEXIÓN.

Este tipo de competencia, llamada: “competencia por conexión se presenta en todos aquellos casos prácticos en los cuales hay 2 o más ideas conexas. Y se dice que 2 o más pretensiones son conexas cuando tienen como denominador común, al menos, 1 de los elementos.

En estos raros e insólitos casos la ley permite que esas pretensiones que son conexas puedan ser acumuladas. En otras palabras, se dice que puedan ser reunidas para que el Juez pueda pronunciarse respecto de ellas en un mismo proceso favoreciendo con ello la economía procesal y evitando el dictado de fallos contradictorios (Torres, 2005).

Ahora bien, la acumulación no encuentra ninguna dificultad si las pretensiones son competencia de un mismo Juez; el problema se presenta en aquellos casos en los cuales la competencia respecto de las pretensiones que se quieren acumular corresponde a Jueces diversos.

En este tipo de casuística, nuestro autor “Liebmann”, (Leible, 2015) señala de la siguiente manera:

“el tipo de acumulación no es posible, excepto que, se elimine ese obstáculo”, ahí si es posible.

La manera como se eliminan esos obstáculos es expresada por “Liebmann” (Leible, 2015) en los siguientes términos:

"Por ello las reglas de la competencia ceden en parte el paso a las exigencias de la simultaneidad del proceso y sufren algunas modificaciones, en el sentido que una de las acciones conexas pueda ser propuesta ante el juez competente para la otra, antes que ante aquél que sería competente según las normas ordinarias. (Carnelutti, Instituciones del Proceso Civil, 2010).

Tales modificaciones son, sin embargo, posibles sólo para la competencia por razón del territorio y para la competencia por razón del valor; las reglas de la competencia por la materia y funcional son más rígidas y no admiten derogación, ni siquiera respecto a la conexidad" (Sáez Martin, 2015).

Nótese entonces que las reglas de la competencia por razón del territorio o por razón de la cuantía ceden ante la necesidad de acumular pretensiones. En ello consiste la competencia por conexión. Algunos ejemplos de lo que decimos se pueden encontrar en nuestro Código Procesal Civil:

1. Si se demanda a varios demandados que tengan domicilios distintos, es competente el Juez del lugar de cualquiera de ellos (artículo 16 del Código Procesal Civil).
2. Si se demanda una pretensión de garantía (aseguramiento de pretensión futura) el Juez competente para conocer de esta pretensión será el Juez competente para el conocimiento de la pretensión principal a fin de que sea decidida en el mismo proceso, aun cuando por razón del territorio y del valor no le corresponda su conocimiento (artículo 32 del Código Procesal Civil).
3. Si se demanda una pretensión accesorio (es decir, una pretensión que sigue la suerte de la principal) el Juez competente para el conocimiento de la accesorio es el competente para conocer la principal, aun cuando por razón del territorio o del valor no lo sea (artículo 32 del Código Procesal Civil). Así se ha manifestado la doctrina cuando afirma que: "la conexión por accesoriedad importa, en consecuencia, la atracción de la demanda accesorio al juez

competente para aquella principal, aunque corresponda por territorio a la competencia de otro Juez y en el caso indicado sin límite del valor".

1.7 CUESTIONAMIENTO DE LA INCOMPETENCIA.

La competencia es un presupuesto procesal y, como tal, su presencia, como la de los demás presupuestos procesales, determina la validez de la relación jurídica procesal. Si en un proceso no existe competencia, este hecho puede ser denunciado o puesto de manifiesto a través de los siguientes mecanismos:

- **DE OFICIO.**

El Juez tiene la facultad y obligación jurídica de declararse incompetente en aquellos casos, en los que evalúe y considere que son competencia improrrogable. Esta facultad se encuentra expresamente prevista en el inciso 4 del artículo 427 del Código Procesal Civil, sin embargo, la misma debe ser ejercida única y exclusivamente respecto de aquellos casos, y se hace la aclaración, "solo" de competencia improrrogable, como se desprende lo establecido en el primer párrafo del artículo 35 del Código Procesal Civil. (Jurídica, Incompetencia de Juez, 2015)

- **A PEDIDO DE PARTE.**

Las partes pueden denunciar la incompetencia del Juez, a través de dos medios de defensa. Cabe precisar que, por disposición del artículo 37 del Código Procesal el uso de uno de los siguientes mecanismos, excluye la posibilidad de utilizar el otro. (Zevallos, 2015)

- **EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA.**

Como ya lo hemos estudiado línea arriba, estas son medios de defensa típicos/ usuales/ regulares a través de los cuales el demandado. En ejercicio de su derecho de defensa, cuestiona (pone en duda) la existencia de cuestionamientos, esto es la ausencia o/ presencia defectuosa, dañada de un presupuesto procesal o una determinada condición de la acción. Una de usuales excepciones que están registradas y amparadas en nuestro

Código Procesal Civil, es la bien conocida excepción de incompetencia (artículo 346 inciso 1 del Código Procesal Civil).

A través de esta opción /mecanismo, el demandado se presenta ante donde el Juez incompetente, el que a la fecha está conociendo el proceso y, cuestiona su propia competencia, respecto desde este mismo caso, y está en la espera de un pronunciamiento de dicho Juez sobre ella. (Vescovi, 2006)

- **INHIBITORIA.**

A través de este mecanismo, el demandado en un proceso ante un Juez incompetente acude donde el Juez que sí es el competente para solicitarle que se declare competente y le solicite al Juez incompetente que le remita el proceso. Este mecanismo de defensa del demandado se encuentra regulado en nuestro Código Procesal Civil.

1.8 CONFLICTO O CONTIENDA DE COMPETENCIA.

Tenemos que dejar en claro que, se genera un conflicto o dígame de otro modo, contienda de competencia, en toda aquella casuística en la cual, dos jueces a criterio personal, y con una previa evaluación consideran ser o no ser competentes para llevar y hacerse cargo de un determinado asunto.

En el 1º supuesto, se habla de un conflicto positivo y, en el 2º supuesto, se habla de conflicto negativo (Vescovi, 2006).

En el conflicto positivo: dos jueces por determinados factores “creen” ser competentes para dirigir determinado asunto. Para este conflicto, tenemos un ejemplo:

“en aquellos casos en los que el demandado haya planteado una inhibitoria y tanto el Juez ante el que se interpuso como el Juez que conoce el proceso se consideran competentes” (Vescovi, 2006).

Ahora bien, en el conflicto negativo, 2 jueces creen (por razones de forma) no ser los competentes para conocer de un determinado asunto, para ello lo queremos ilustrar con el siguiente ejemplo:

“Aplica para aquellos casos, en los cuales el que ha sido demandado interponga una excepción de incompetencia y el Juez que conoce el proceso la declare “Fundada”, remitiendo el proceso al Juez que éste considera que es el competente; quien al recibir el proceso se declara también incompetente” (Vescovi, 2006).

También puede presentarse en aquellos casos en los cuales, el Juez se declare incompetente de oficio y, a consecuencia de ello, remite el proceso ante el Juez que él (a discrecionalidad) considera competente; quien al recepcionar el proceso, se declara también incompetente.

En este tipo de casos, tanto en el conflicto positivo y negativo de competencia son resueltos por el órgano jurisdiccional superior.

2 Artículo 36

“Efectos de la incompetencia: Al declarar su incompetencia, el juez declara asimismo la nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso, con excepción de lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 451” (Civil, 2015)

Uno de los efectos de la probada incompetencia, y ello a un lado de lo que se cuestione vía excepción o por contienda, es poder generar la nulidad de todo lo actuado y la conclusión del proceso, ello como respuesta al principio de legalidad e irrenunciabilidad que rige la competencia (ver el artículo 6 del CPC) que dice: “la competencia solo puede ser establecida por ley. La competencia civil no puede renunciarse ni modificarse, salvo aquellos casos previstos en ley o en convenios internacionales” (Montoya, 2015).

El efecto de la nulidad que consagra la norma pareciera que se agota allí, pero no es cierto, porque permite de manera excepcional, una vez consentido o ejecutoriado el auto que declara fundada la excepción de competencia territorial relativa, remitir los actuados al juez que corresponda. Este efecto modifica los alcances del texto primigenio del

artículo 451 del CPC, permitiendo que se remita los actuados al juez que corresponda y no se concluya el proceso (Piña, 2002).

El juez territorialmente competente continuará con el trámite del proceso en el estado en que este se encuentre. Si lo considera pertinente, aun cuando la audiencia de pruebas hubiera ocurrido, puede renovar la actuación de alguno o de todos los medios de prueba, atendiendo a lo dispuesto en la última parte del artículo 50 del CPC (Piña, 2002).

Nótese que esta excepción solo opera para la infracción a la competencia territorial relativa, mas no para el cuestionamiento de la competencia absoluta, por ser improrrogable. Véase el caso cuando las partes al contratar pactan que en caso de incumplimiento del contrato, se someterán a los jueces de la ciudad de Lima, renunciado al juez de sus domicilios; sin embargo, ante la inejecución se procede a demandar ante el juez del domicilio del demandado (Huacho) y no ante el de Lima, como se pactó. Si producido esto, el demandado al interponer la excepción de incompetencia, por considerar que no es competente el juez de Huacho sino el de Lima, tal como se pactó, el efecto de excepción será el de remitir los actuados al juez de ley, esto es, al de Lima, el mismo que continuará con el trámite en el estado en que se encuentra; situación que no es extensiva para el cuestionamiento de la competencia territorial absoluta, como sería en materia de sucesiones (ver el artículo 19 del CPC), pues aquí, en el supuesto de ampararse la excepción, se concluye el proceso y se archiva definitivamente este. (Jurídica, Fundamento Constitucional de la Competencia , 2015)

3 Análisis a la corrección mediante la Ley 30293

Uno de los puntos clave para lograr un régimen coherente de la nulidad procesal es relajar la gravedad del vicio producido por la incompetencia absoluta. En nuestro sistema, como se ha visto la existencia de este vicio condena irremediabilmente al procedimiento a ser decretado nulo[Inclusive, siendo para nuestro ordenamiento un vicio tan grave, y descartada la vía del proceso de nulidad de cosa juzgada, es posible obtener la nulidad de dicho proceso a través de un amparo, argumentando la violación a la *tutela procesal efectiva*, concretamente, la vulneración del derecho fundamental al juez natural, cuyo núcleo duro está compuesto por las reglas de la competencia. No obstante, como se verá en el texto, no estoy de acuerdo con una nulidad total del procedimiento: es posible flexibilizar o atenuar la gravedad de este vicio.].

No obstante, siempre en la búsqueda de tratar la nulidad como un mecanismo excepcional, esta solución legislativa debe ser modificada por ser excesivamente rigurosa, más aún cuando en nuestro país, la competencia por materia (absoluta) está bastante diversificada [Por ejemplo, los jueces civiles, jueces con sub- especialidad comercial, jueces mixtos en los módulos básicos de justicia, etc.] (Torres, 2005).

Si bien es verdad, que el tema que abordamos es el ejercicio válido de la función jurisdiccional, mientras que las reglas de competencia responden a una mejor organización del sistema que imparte justicia, no debe olvidarse que las hipótesis de incompetencia absoluta ocurren cuando otros jueces, igualmente investidos del poder jurisdiccional, están impedidos de ejercerlo en determinado caso concreto. De ahí que se pregunta lo siguiente:

- ¿Es el vicio ocasionado por la incompetencia lo suficientemente potente para irradiar los demás actos del procedimiento?
- ¿Es correcto afirmar que ningún tipo de acto de las partes o del juez, o los medios probatorios ofrecidos pueden ser aprovechados?

En mi concepto, la respuesta a ambas preguntas es negativa.

Suponiendo que un juez civil tramitase un proceso de responsabilidad civil por accidente de trabajo (materia sobre la cual la jurisprudencia peruana fue vacilante y tras un procedimiento impecablemente realizado, le da la razón al demandante. Apelada la sentencia, el juez superior determina que existe un vicio de incompetencia porque el juez competente era el de juez de trabajo. Una primera opción, que es la ofrecida por nuestra legislación, es anular todo lo actuado, declarar improcedente la demanda y que ésta sea presentada ante el juez competente (Reto L. d., 2015).

El vicio radica, sin lugar a dudas, en la demanda; ¡sin embargo, resulta sumamente difícil aceptar que actos como un apersonamiento, la propia contestación de demanda e inclusive los medios probatorios ofrecidos y actuados, puedan verse afectados! Y hasta pueden incurrir en un vicio, ello puede llegar hasta el punto de ser erradicados completamente, o que sean totalmente inservibles, dado que, en realidad, lo que está en tela de juicio son los actos del juez. A priori, por ende, es necesario que los actos de las partes sean aprovechados, ello con el uso correcto de los mismos.

No obstante, un problema vinculado sería, por ejemplo: “si se tramita una causa en un proceso sumario ante el juez de paz letrado debido la cuantía, pero el juez competente, en realidad, era el juez especializado en lo civil y, por tanto, el proceso correspondiente era el de conocimiento”.

En este punto, más que la incompetencia por cuantía (la cual, en mi opinión, en ningún caso justifica una invalidación del procedimiento), hay una reducción de las garantías de las partes, y especialmente del demandado porque éste es sometido a una vía procedimental en donde no puede ejercitar su derecho de defensa como el ordenamiento le confiere. Aun siendo un vicio, la incompetencia genera una distorsión en el procedimiento, siendo que es ésta lo que realmente posibilita la existencia de una recreación de nulidad (Sáez Martín, 2015).

Tenemos entonces que, en realidad, son los actos del juez los que pueden ser cuestionados debido a la incompetencia. No obstante, no sería correcto afirmar que una eventual invalidez deba necesariamente abarcar a todos esos actos, sólo de manera parcial. Hay algunos que pueden y deben subsistir como los decretos. El problema, en realidad, reside en los actos decisorios adoptados por el juez incompetente, es decir, los autos, sus efectos y posteriormente las sentencias. No obstante, inclusive no debe descartarse la posibilidad de que ciertos actos decisorios no sean afectados por un eventual pronunciamiento de invalidez. La pregunta que nos tendríamos que hacer es:

¿Y cuál es el criterio para determinar la no invalidación de ciertos actos decisorios?

Aquí es donde se ratifica una vez más, la ventaja de la propuesta: los actos decisorios que, a pesar de haber sido pronunciados por un juez absolutamente incompetente (por tanto, actos viciados), no sean capaces de afectar decisivamente la idoneidad del acto final, no deberán ser anulados, o esto es lo que se pretende y creemos que sería lo más idóneo. Ello quiere decir, evidentemente, que solo los actos decisorios que no permitan la elaboración idónea del acto final deberán ser anulados, porque caso contrario se estaría dejando en una indefensión, y exponiendo notoriamente a una de las partes, ello es la más perjudicada, por dicha medida. El criterio de la preservación de la idoneidad del acto final debe primar también en la incompetencia.

A modo de ilustración presentamos el siguiente cuadro comparativo que resalta en los diferentes campos los artículos que contenía la ley N° 28544 (anterior) y la ley 30293 (nueva) pudiendo observar cuales fueron los cambios que tuvo una ley y la otra.

ARTÍCULOS que están MODIFICADOS	MODIFICATORIA – LEY No. 30293
<p>“Artículo 35.- Incompetencia</p> <p>La incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, turno y territorio, esta última cuando es improrrogable, se declarará de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, sin perjuicio de que pueda ser invocada como excepción. “</p>	<p>“Incompetencia Artículo 35.-</p> <p>La incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, turno y territorio, esta última cuando es improrrogable, se declarará de oficio <u>al calificar la demanda</u> o excepcionalmente en cualquier estado y grado del proceso, sin perjuicio de que pueda ser invocada como excepción.”</p>
<p>“Artículo 36.- Efectos de la incompetencia</p> <p>Al declarar su incompetencia, el Juez declarará asimismo la nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso, con excepción de lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 451.” (*)</p>	<p>“Efectos de la incompetencia</p> <p>Artículo 36.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 35, el Juez al declarar su incompetencia lo hace en resolución debidamente motivada y dispone la inmediata remisión del expediente al órgano jurisdiccional que considere competente. (Civil", 2015)</p> <p>Si en los casos indicados en el artículo 35 el Juez a quien se remite el</p>

	<p>proceso se declara incompetente, se observan las siguientes reglas:</p> <p>1. Tratándose de un conflicto por la materia, se remite el proceso al órgano jurisdiccional superior de la especialidad. Si los órganos jurisdiccionales en conflicto pertenecen a distintos distritos judiciales, se remite a la sala correspondiente de la Corte Suprema. (Civil", 2015)</p> <p>2. Tratándose de la cuantía, se remitirá el proceso a la Sala Civil de la Corte Superior correspondiente. (Civil", 2015)</p> <p>3. Tratándose del territorio, se remite el proceso a la Sala Civil correspondiente de la Corte Superior o de la Corte Suprema, según corresponda.” (Civil", 2015)</p>
--	---

4 Derecho comparado

4.1 Derecho Brasileño

Centrándonos en el derecho comparado, el CPC brasileño merezca atención (Civil", 2015):

“Art. 113. La incompetencia absoluta debe ser declarada de oficio y puede ser alegada, en cualquier tiempo y grado de jurisdicción, independientemente de excepción.” (Cooperación, 2016)

1. No siendo, sin embargo, deducida en el plazo de la contestación, o en la primera oportunidad en que le corresponda intervenir en el proceso, la parte responderá integralmente por las costas. (Cooperación, 2016)

2. Declarada la incompetencia absoluta, solamente los actos decisorios serán nulos, remitiéndose los autos al juez competente” (“Art. 113. - La incompetencia absoluta debe ser declarada de oficio y puede ser alegada, en cualquier tiempo y grado de jurisdicción, independientemente de la excepción (Cooperación, 2016).

1º - No siendo, sin embargo, deducida en el plazo de la contestación, o en la primera oportunidad en que le corresponda hablar en los autos, la parte responderá íntegramente por las costas.

2º - Declarada la incompetencia absoluta, sólo los actos decisorios serán nulos, remitiéndose los autos al juez competente ”). En el punto que aquí interesa, vale la pena resaltar que la jurisprudencia brasileña, en las hipótesis de incompetencia absoluta, ya ha optado por no decretar la nulidad de todos los actos decisorios, sino sólo de aquellos que puedan ser aprovechados por el juez competente.

En este mismo sentido, hay un tema importantísimo que no puede pasarse por alto. Si únicamente los actos decisorios son aptos para ser invalidados, ahí viene la pregunta que todos nos hacemos:

- ¿Quién debe decidir cuáles subsisten y cuáles no subsisten es necesariamente el juez competente y no el incompetente?

Dos son las razones que llevan a afirmar aquello:

- (i) el juez que concluye que es incompetente entonces no debe seguir practicando ningún otro acto (porque es incompetente), sobre todo alguna recreación de nulidad; y

- (ii) (ii) si es posible que inclusive algunos actos decisorios puedan ser aprovechados y otros anulados, esta decisión únicamente puede ser tomada por el juez competente. Por lo tanto, si el juez se considera incompetente, inmediatamente debe realizar la traslación, es decir, la remisión del proceso al juez que debe tramitarlo. Esta solución, dicho sea de paso, no se desprende con claridad de la legislación brasileña (Piña, 2002).

De esta manera, sin pretensión de estancar el tema, considero que la incompetencia (absoluta y relativa) debe continuar como motivo de excepción. Asimismo, en el caso de la absoluta puede ser apreciada ex officio pero –y aquí viene lo importante– fomentando el contradictorio entre las partes a fin de que se determine si existe o no incompetencia absoluta (en cuyo caso se limitará a realizar la traslación); y ya ante el juez competente, (i) definir si la incompetencia generó una distorsión del procedimiento que haya restringido o vaya a restringir el derecho de defensa de las partes; y (ii) decidir cuáles actos decisorios deberán ser anulados y cuáles deberán subsistir.

4.2 En el Derecho Guatemalteco

Entendiendo el ámbito de aplicación procesal, como una complejidad de cuestiones, es sumamente necesario la distribución del trabajo, lo que ocasiona la división de la actividad jurisdiccional. Esa división o medida como se distribuye la jurisdicción, es lo que se conoce y se denomina como competencia.

Por ello se puede decir en el Derecho Guatemalteco que esta es el límite de la jurisdicción. Llamada como la medida como se distribuye la actividad jurisdiccional entre los diferentes órganos judiciales.

La jurisdicción la ejercen todos los jueces en conjunto, es una facultad, pero la competencia corresponde al juez considerado en singular. (Carnelutti, Instituciones del Proceso Civil, 1959) “Todo juez tiene jurisdicción, pero no todo juez tiene competencia”, en referencia a la generalidad de la jurisdicción y la especificidad de la competencia.

La competencia para Jaime Guasperte: “es la *atribución a un determinado órgano jurisdiccional de determinadas pretensiones con preferencia a los demás órganos de la Jurisdicción* (Civil”, 2015).

Con todo lo que hemos dicho hasta estos momentos, podemos inferir de manera muy natural, que la competencia en el inicio del proceso es fundamental y el juez tiene obligación de establecerla, es así como la Ley del Organismo Judicial, regula que los tribunales sólo podrán ejercer su potestad (debe entenderse jurisdicción) en los negocios y dentro de la materia y el territorio que se les hubiere asignado (art. 62) y faculta (diría obliga) a los jueces a conocer de los asuntos de su competencia (art. 94) y los obliga a abstenerse de conocer, si de la exposición de hechos, aprecie que no es competente (art. 116) y en caso de duda, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara en este caso civil debe resolver (art. 119). Quiere decir lo anterior, que es una obligación del juez determinar su competencia en los casos sometidos a su conocimiento. (Calamandrei, 2000)

Cuando el juez no sea claro y llegue a determinar su incompetencia para conocer, pero las partes se lo hicieren ver, a través de la correspondiente excepción, es sin lugar a duda su obligación resolverlo previamente antes de conocer sobre otras excepciones o la forma más que el fondo del tema en cuestión.

En la práctica no es posible concebir la existencia de un solo juez, sino que es necesaria la división del trabajo jurisdiccional, atendidas las diversas consideraciones de territorio, naturaleza del juicio, cuantía, etc. Y un elemental principio, fundamentado en la falibilidad del criterio humano, hace también necesaria una regulación de la competencia, que permita la revisión de los fallos judiciales, presentándonos por eso en la organización judicial, la competencia por razón de grado (Gordillo, 1998).

En el derecho guatemalteco, los criterios que son tomados generalmente acerca de la competencia, con su siempre impuesta terminología tradicional, y, al final suele mencionarse la terminología moderna.

- Competencia por razón del territorio: Ello básicamente se refiere en la marcada y entablada división del territorio estatal en jurisdicciones, que en

su mayoría pues suelen coincidir con las divisiones político- administrativas que existen ese país.

Ello en consecuencia, de que los jueces tienen plena jurisdicción en su territorio, la cual será ejercida sobre las personas que allí domicilian y sobre las cosas que están allí situadas. En este tipo de casos, en que, como ya hemos dicho líneas arriba “la competencia se determina por razón del territorio”, las facultades jurisdiccionales de los jueces, no varían, son las mismas, pero con distinta competencia territorial.

- Competencia por razón de la materia: Esta se distribuye atendiendo a la naturaleza del litigio, para ello pues existen jueces: penales, civiles, de familia, laborales, comerciales, tributarios, aduaneros, etc. Por un lado, la competencia en los asuntos civiles y mercantiles, está encomendada a los jueces ordinarios civiles de paz o de instancia, teniendo los jueces de paz de la capital y de aquellos Municipios en donde no hubiere jueces de Primera Instancia de Familia o Jueces de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, competencia también para conocer de asuntos de familia pero de ínfima cuantía la que se ha fijado hasta en seis mil quetzales (Q6,000.00), conforme acuerdo de la Corte Suprema de Justicia números 6-97 y 43-97 (Zevallos, 2015).
- Competencia por razón de grado: Este se da en los sistemas de organización judicial con varias instancias, para la revisión de las decisiones, en razón de los recursos oportunos, preciso y necesarios.
- Competencia por razón de la cuantía: Este tipo de competencia se distribuye, según el conocimiento de los asuntos “litigio”, siempre atendiendo al valor, el que se presupuesta en razón y conforme a las reglas enumeradas a continuación:
 1. No se computan intereses. (art. 8 numeral 1 CPCyM) (Civil", 2015)
 2. Cuando se demanda pagos parciales, se determina por el valor de la obligación o contrato respectivo. (art. 8 numeral 2 CPCyM) (Civil", 2015)

3. Cuando verse sobre rentas, pensiones o prestaciones periódicas, se determina por el importe anual. (art. 8 numeral 3 CPCyM) (Civil", 2015)
4. Si son varias pretensiones, se determina por el monto a que ascienden todas (Arts. 11 CPCy M) (Civil", 2015).

El art. 7 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece la competencia por el valor, norma que aunado a los acuerdos de la Corte Suprema de Justicia 3-91 y 6-97 fijan los límites y que podemos interpretar así:

1. Los Jueces de Paz conocen de asuntos de menor cuantía lo que se determina del análisis del artículo 7 del CPCyM. Por exclusión, los jueces de primera instancia son competentes en los asuntos de mayor cuantía (Civil", 2015).
 2. Los Jueces de Paz en la capital conocen asuntos de menor cuantía hasta en la suma de TREINTA MIL QUETZALES (Q.30, 000.00) en consecuencia, los Jueces de Primera Instancia conocen de asuntos de mayor cuantía arriba de dicha suma (Civil", 2015).
 3. Los Jueces de Paz en las demás cabeceras departamentales y en los Municipios de Coatepeque, Santa Lucía Cotzumalguapa, Mixco, Amatitlán y Villa Nueva, conocen asuntos de menor cuantía hasta en la suma de VEINTE MIL QUETZALES (Q.20, 000.00) en tal virtud los Jueces de Primera Instancia en las cabeceras departamentales y en los municipio relacionados, si hubiere, conocen en asuntos de mayor cuantía arriba de dicha suma (Civil", 2015).
 4. Los Jueces de Paz en los demás Municipios, con excepción de los indicados anteriormente, conocen en asuntos de menor cuantía hasta por la suma de DIEZ MIL QUETZALES (Q.10, 000.00) (Civil", 2015).
 5. Es importante también señalar, que la ínfima cuantía, competencia del juez de Paz, se fija en la suma de UN MIL QUETZALES (Q. 1,000.00) pero la misma se establece específicamente para la utilización del procedimiento señalado en el artículo 211 del Código Procesal Civil y Mercantil (Gordillo, 1998).
- Competencia por razón de turno: Esta denominación sugiere el comentario del procesalista Alsina al referirse a jueces de la misma competencia a

quienes se les fija determinados días para la recepción de las causas nuevas, a fin de hacer una distribución equitativa del trabajo, entre los mismos. Así un juez, no obstante ser competente para entender una causa civil, debe negarse a intervenir si es iniciada fuera del turno que le ha sido asignado (Bocanegra, 2015).

- OTRAS CLASES DE COMPETENCIA:

Competencia Absoluta y Competencia Relativa: Se entiende por competencia absoluta, aquella que está fundada en una división de funciones que afecta al orden público y por esta razón no es modificable por el arbitrio de las partes o del juez, como sucede por ejemplo en la competencia por razón de la materia, del grado o de la cuantía o por el turno. Competencia relativa es aquella que puede ser determinada por las partes, porque la pueden renunciar (pacto de sumisión o prórroga de competencia). Así ocurre por ejemplo con la competencia por razón del territorio (domicilio o situación de la cosa) (Rimonte, 2014).

Alsina, sostiene que no es la competencia, sino la incompetencia, la que puede ser absoluta o relativa, y así dice que un juez tiene incompetencia relativa cuando la persona demandada o la cosa objeto del litigio están fuera de su circunscripción territorial, porque su incompetencia nace de una circunstancia relativa a la persona o la cosa, en tanto que tiene incompetencia absoluta para conocer de una cuestión por la materia, con independencia de la persona o del objeto litigioso (Rimonte, 2014).

Competencia Subjetiva del Juez: Con ella se quiere denotar, la especial situación del Juez, que debe estar colocado frente a las partes y frente a la materia propia del juicio, en condiciones de poder proceder con serenidad y desinterés. Para lograr esta situación, la ley establece prohibiciones a los jueces o causales de excusa o recusación. Los actos que no radiquen jurisdicción ni importen conocimiento de causa no son susceptibles de recusación como los exhortos y despachos por ejemplo (Zevallos, 2015).

D) Reglas para su determinación:

En primer lugar es importante indicar que conforme al pacto de sumisión, las partes pueden someterse a un juez distinto del competente por razón de territorio, lo que implica una prórroga de competencia, la que también se puede prorrogar conforme a lo que establece el artículo 4 del Código Procesal Civil y Mercantil, específicamente:

- Por falta o impedimento de jueces competentes, en el área territorial en donde debió resolverse el conflicto.
- Por sometimiento expreso de las partes (pacto de sumisión), es decir acuerdo de las partes de someter el conflicto a un juez distinto al originalmente competente por razón de territorio.
- Por contestar la demanda sin oponer incompetencia, que significa una renuncia al derecho de que conozca el juez que en primera instancia pudo ser competente.
- Por reconvención, se da la prórroga, cuando de la contrademanda era juez competente uno distinto al que conoce de la demanda.
- Por acumulación.
- Por otorgarse fianza a la persona del obligado.

En acciones personales es juez competente el de 1ª. Instancia del departamento en que el demandado tenga su domicilio, si la acción personal es de menor cuantía el Juez de Paz de su vecindad. En estos casos, el demandado puede ser demandado en su domicilio, no obstante, cualquier renuncia o sometimiento de este.

En la acción por alimentos o pago de pensiones alimenticias, la competencia la elige la parte demandante, entre el juez de su domicilio o el del demandado.

Cuando no existe domicilio fijo del demandado, es competente el juez del lugar en donde se encuentre o el de su última residencia.

En caso de domicilio contractual, si el demandado eligió por escrito domicilio para actos o asuntos determinados (domicilio contractual o electivo) puede ser demandado en dicho domicilio.

En caso de litisconsorcio, si fueran varios demandados, es competente el juez del domicilio de cualquiera de ellos.

En reparación de daños es juez competente el del lugar en que se hubieren causado.

En acciones reales sobre bienes inmuebles, es competente el Juez del lugar en que se encuentren situados y si fueren varios, el Juez del lugar en que estén situados cualesquiera de ellos, con tal que allí mismo tenga su residencia el demandado y si no concurren ambas circunstancias, el juez del lugar en donde esté situado el de mayor valor, según matrícula fiscal.

En acciones que se refieran a establecimiento comercial o industrial, es competente el Juez del lugar en donde esté situado.

Cuando se ejerzan acciones reales sobre inmuebles conjuntamente con las de otra naturaleza es juez competente el del lugar en donde estén situados los primeros.

En todos los casos en que se ventilen cuestiones cuyo valor no pueda determinarse, son competentes los jueces de primera instancia.

En procesos sucesorios, es juez competente el de 1ª. Instancia, en su orden: el del domicilio del causante, a falta de este el del lugar en donde estén ubicados la mayor parte de los bienes inmuebles que formen la herencia y a falta de estos, el del lugar en que el causante hubiere fallecido.

En ejecuciones colectivas, es juez competente el del lugar en que se halle el asiento principal de los negocios del deudor.

En obligaciones accesorias, es competente el que es de la principal.

En asuntos de jurisdicción voluntaria, es competente el juez de 1ª. Instancia.

De acuerdo al artículo 18 de la ley de Tribunales de Familia, en los procesos relacionados con asuntos de familia en que figuren como demandantes menores

o incapaces, será Juez competente el del domicilio de éstos o el del lugar donde resida el demandado, a elección de los demandantes.

En el Patrimonio Familiar, el que desee constituirlo, deberá pedirlo por escrito al Juez de Primera Instancia de su domicilio, para que se le dé la autorización correspondiente (art 444 Código Civil).

En el caso de la dispensa judicial para suplir el consentimiento de los ascendientes o tutores, para que el menor contraiga matrimonio, a que se refiere el artículo 425 del CPCyM y los arts. 83 y 84 del Código Civil, la regla de la competencia debe ser la del domicilio del menor o de los ascendientes o tutores, a elección del menor, según lo visto en el artículo 18 de la Ley de Tribunales de Familia.

El divorcio o la separación por mutuo consentimiento podrán pedirse ante el juez del domicilio conyugal, siempre que hubiere transcurrido más de un año, contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio (art. 426 CPCyM) (Civil", 2015).

En los casos de reconocimiento de preñez o de parto, a que se refieren los artículos 435 a 437 del CPCyM, la solicitud puede hacerse ante cualquier Juez de Primera Instancia (Civil", 2015).

La mayoría de los actos de jurisdicción voluntaria tienen competencia todos los jueces de primera instancia. En algunos casos, como en la declaratoria de incapacidad (art. 406 y siguientes del CPCyM) (Civil", 2015) las circunstancias determinarán a qué juez se acude. Seguramente se hará ante el Juez que tenga las mayores facilidades para el examen del presunto incapaz y para la adopción de las demás medidas, o sea el lugar donde se encuentre. En las diligencias de utilidad y necesidad (Art. 420 a 423 del CPCyM) (Civil", 2015), normalmente se acudirá al Juez del lugar en que se encuentren los pretendientes.

En los casos de ausencia, al Juez del último domicilio del ausente. En los actos preparatorios del juicio debe ser juez competente, el que lo fuere para el negocio principal. En las medidas cautelares o precautorias debe seguirse el mismo principio, salvo el caso de urgencia. Las tercerías se las considera como una incidencia del asunto principal.

Criterios para determinar la competencia según la terminología moderna: Son expuestos por De la Plaza, en esta forma “... a) del valor o cuantía de la reclamación o la naturaleza de la misma y en este caso, los procesalistas la denominan competencia objetiva; b) de la organización jerárquica de los Tribunales y las funciones que, según la misma, se atribuyen a cada uno de ellos, y se habla entonces de una competencia funcional; y c) de la extensión del territorio y la subsiguiente necesidad de dividir el trabajo entre los órganos jurisdiccionales de un mismo grado, según criterios que en cada caso determinan cuál de ellos es el más idóneo para el conocimiento del negocio. A estos puede sumarse otro derivado de la conexión, que, más que un criterio para fijar la competencia, envuelve un desplazamiento de la que normalmente se tiene, en realidad, supone la existencia de un vínculo que por varias razones, liga dos o más pretensiones o bien dos o más procesos. En el Derecho Procesal guatemalteco, la competencia por conexión, se da en el caso de la reconvención, salvo naturalmente las limitaciones impuestas a ésta, y en general en los casos de acumulación, conforme al artículo 4º. Del CPCyM. Jaeger reduce a dos los criterios con que la competencia puede atribuirse: a la *idoneidad* del órgano jurisdiccional para conocer del negocio (criterio *funcional*), o la *conveniencia económica* de los litigantes (criterio económico).

III. RESULTADOS

3.1 Con respecto a la incidencia de la modificación de los artículos 35, 36 del CPC mediante la LEY 30293 en los procesos civiles del distrito Judicial de La Libertad – 2016

Tabla 1 Incidencia de la modificación de los artículos 35, 36 del CPC mediante la LEY 30293 en los procesos civiles del distrito Judicial de La Libertad – 2016

Categoría	Procesos actuados		Simplificación Procesal		Reducción de carga procesal		TOTAL	
	F	%	F	%	F	%	F	%
No influyente	1	4%	1	4%	7	29%	0	0
Medianamente influyente	10	42%	11	46%	17	71%	12	50%
Influyente	13	54%	12	50%	0	0%	12	50%
TOTAL	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%

Fuente: Encuesta realizada

Interpretación:

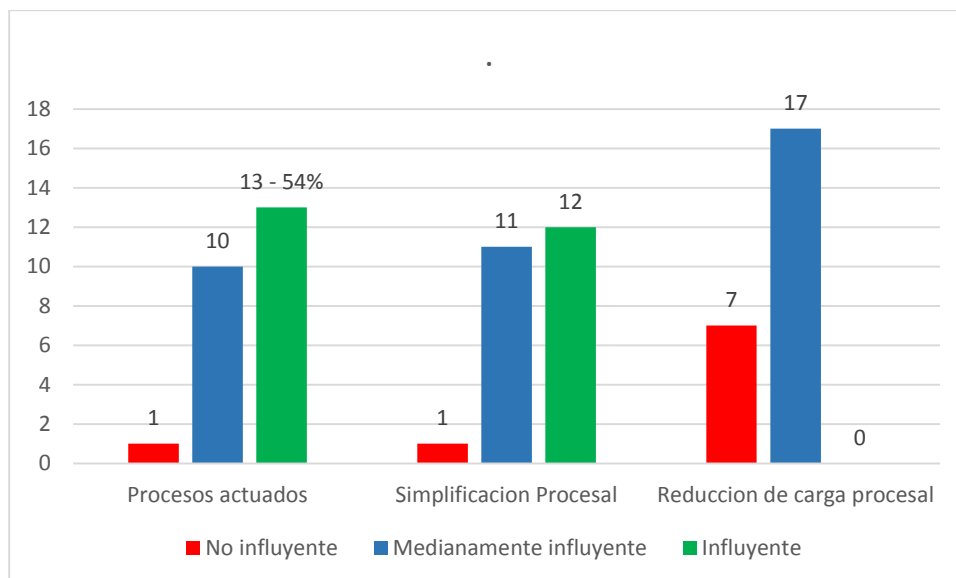
Se puede apreciar que con respecto a la variable total modificación de los artículos 35 y 36 del CPC se puede apreciar que 50% (12 participantes) considera que es medianamente influyente, y 50% (12 participantes) considera que es influyente.

Con respecto a la dimensión procesos actuados, un 4% (1 participante) considera que no es influyente, un 42% (10 participantes) considera que es medianamente influyente y un 54% (15 participantes) considera que no es influyente.

Con respecto a la dimensión simplificación procesal, un 4% (1 participante) considera que no es influyente, un 46% (11 participantes) considera que es medianamente influyente y un 50% (12 participantes) considera que no es influyente.

Con respecto a la dimensión reducción de carga procesal, un 29% (7 participantes) considera que no es influyente, un 71 % (17 participantes) considera que es medianamente influyente. Estos resultados se aprecian en la figura.

Figura. 1 Incidencia de la modificación de los artículos 35, 36 del CPC mediante la LEY 30293 en los procesos civiles del distrito Judicial de La Libertad – 2016



Fuente: Tabla 2

3.2 Con respecto celeridad debido a la modificación de los artículos 35, 36 del CPC mediante la LEY 30293 en los procesos civiles del distrito Judicial de La Libertad – 2016

Tabla 2 Celeridad debido a la modificación de los artículos 35, 36 del CPC mediante la LEY 30293 en los procesos civiles del distrito Judicial de La Libertad – 2016

Categoría	Tiempo de proceso		Celeridad aplicación		Calidad de resolución		TOTAL	
	F	%	F	%	F	%	F	%
No influyente	0	0%	1	4%	2	8%	1	4%
Medianamente influyente	14	58%	10	42%	10	42%	9	38%
Influyente	10	42%	13	54%	12	50%	14	58%
TOTAL	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%

Fuente: Encuesta realizada

Interpretación:

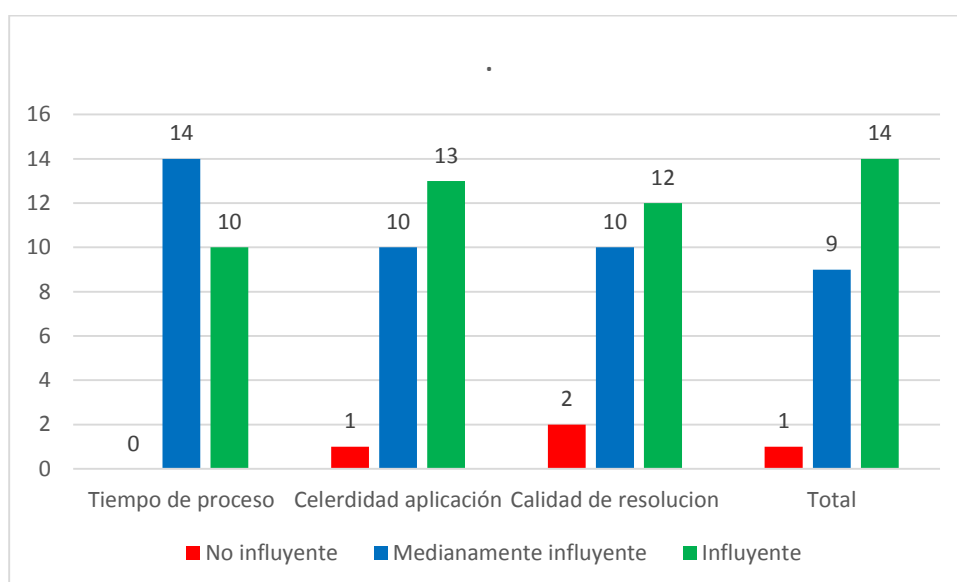
Se puede apreciar que con respecto a la variable total celeridad procesal se puede apreciar que el 4% opina que no es influyente, un 38% (9 participantes) considera que es medianamente influyente, y 58% (14 participantes) considera que es influyente.

Con respecto a la dimensión tiempo de proceso, un 58% (14 participantes) considera que es medianamente influyente y un 42% (10 participantes) considera que no es influyente.

Con respecto a la dimensión celeridad procesal, un 4% (1 participante) considera que no es influyente, un 42% (10 participantes) considera que es medianamente influyente y un 54% (13 participantes) considera que no es influyente.

Con respecto a la dimensión calidad de resolución, un 8 % (2 participantes) considera que no es influyente, un 42 % (10 participantes) considera que es medianamente influyente y un 50% (12 participantes) considera que es influyente. Esto se aprecia en el grafico

Figura. 2 Celeridad debido a la modificación de los artículos 35, 36 del CPC mediante la LEY 30293 en los procesos civiles del distrito Judicial de La Libertad – 2016



Fuente Tabla 3

3.3 Determinación de relación estadística significativa entre la modificación de los artículos 35, 36 del CPC mediante la LEY 30293 y la celeridad procesal en el distrito Judicial de La Libertad – 2016

3.3.1 Con respecto a la relación entre variables

a) Hipótesis estadística

H0: No existe relación entre la modificación de los artículos 35, 36, del CPC mediante la LEY 30293 y la celeridad procesal

H1: Existe relación entre la modificación de los artículos 35, 36 del CPC mediante la LEY 30293 y la celeridad procesal

b) Estadístico de contraste

Por tratarse de variables que se miden en escala ordinal se utilizara la prueba de asociación de Chi Cuadrado para determinar la asociación.

Para determinar la intensidad de asociación entre las variables se utilizara el coeficiente de contingencia Chi cuadrado.

c) Resultado

Tabla 3 Resultados de asociacion entre la ley 30293 y la celeridad procesal de prueba de Chi Cuadrado

		Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado Pearson	de	11,016 ^a	2	,004

Los resultados de la prueba de Chi cuadrado señalan que $p = 0.004$ menor que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis alternativa.

Tabla 4 Resultados de intensidad de asociacion entre la ley 30293 y la celeridad procesal de prueba de Chi Cuadrado

		Valor	Sig. aproximada
Nominal por nominal	Coeficiente de contingencia	,561	,004

La intensidad de asociación entre las variables es media pues el coeficiente de contingencia es igual a + 0.561 se encuentra en el rango de 0.35 a 0.7, por lo que la asociación es directa y de intensidad media

d) Conclusión

Se concluye con un nivel de confianza del 95% que “Existe relación entre la modificación de los artículos 35 y 36, del CPC mediante la LEY 30293 y la celeridad procesal” y la intensidad de asociación de las variables es media, con un nivel de confianza del 95%

IV. DISCUSIÓN

Nuestros resultados concuerdan con Sáez (2015) quien señala que la competencia trata de los factores que determinan la manera en que se distribuye la competencia de los tribunales en el ordenamiento jurídico chileno, en nuestro caso absurdamente interrumpía el proceso, conllevando a pérdidas por una parte del litigante, y por otra al sistema de justicia, pues todos los recursos que el Poder Judicial por incompetencia se perdían en la interrupción. Para nuevamente consumir recursos al reiniciar el proceso. Muchos procesos y lentitud tenían como causa un círculo vicioso de procesos interrumpidos y vueltos a reiniciar. La modificación de los artículos 35 y 36 del Código Procesal Civil, ante la figura de la incompetencia ya no interrumpe el proceso sino distribuye según competencia como señala Sáez (2015) en Chile.

Con respecto al antecedente de Cortez (2011) quien señala “serán excepciones dilatorias aquellas que tiendan a dilatar o postergar la contestación de la demanda, como sería la incompetencia de Jurisdicción, etc.”, nuestro país, la competencia ha sido una salida dilatoria o un punto vulnerable de la legislación. Por una parte era una forma de resolver la carga judicial del magistrado alegando la incapacidad o falta de legitimación para obrar y lamentablemente nuestro Código en lugar de que el juez con incapacidad remita al juez con capacidad, lo interrumpía. Es importante destacar que dada la intensidad del territorio y la concentración de oficinas en las ciudades principales donde se concentran los juzgados especializados en las ciudades y este es un factor que produce errores al iniciar la demanda en el juez que no tiene competencia. Nosotros coincidimos con Cortez (2011) quien señala que como principales excepciones dilatorias, las siguientes: Declinatoria de jurisdicción o incompetencia del juez; Excepción declinatoria de jurisdicción o incompetencia del juez, que si bien es cierto son correctas pero su tratamiento en nuestro código procesal civil era totalmente inadecuado y que se corrige a través de la ley 30293

Con respecto al antecedente de Deras (2011) su código procesal con el mismo espíritu del nuestro señala “La competencia es la atribución a un determinado órgano jurisdiccional de determinadas pretensiones con preferencia a los demás órganos de la Jurisdicción. Determinar la competencia en el inicio del proceso es fundamental y el juez tiene obligación de establecerla, es así como la Ley del Organismo Judicial, regula que los tribunales sólo podrán ejercer su potestad (debe entenderse jurisdicción) en los negocios y dentro de la materia y el territorio que se les hubiere asignado (art. 62) y faculta (diría obliga) a los jueces a conocer de los asuntos de

su competencia (art. 94) y los obliga a abstenerse de conocer, si de la exposición de hechos, aprecie que no es competente (art. 116) y en caso de duda, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara en este caso civil debe resolver (art. 119)” y similarmente a como se interpreta nuestro Código quiere decir lo anterior, que ES UNA OBLIGACIÓN DEL JUEZ determinar su competencia en los casos sometidos a su conocimiento. Además, el tratamiento del código guatemalteco es similar al código peruano antes de su corrección mediante la ley 30293, pues señala “el mismo cuerpo legal en su artículo 121 establece la obligación de los tribunales de conocer de oficio de las cuestiones de competencia, bajo pena de nulidad de lo actuado y de responsabilidad del funcionario”, y a diferencia de nuestro código, no había responsables, el proceso solamente se interrumpía.

Los beneficios tangibles de la ley son resaltados por destacados también por peruanos, como es el caso del antecedente de Chávez, Otazú, & Oquiche (2016) quien señala “El texto actual garantiza la celeridad procesal que antes se veía afectada por la posibilidad de retrotraer el proceso al inicio al declararse la incompetencia transcurridas diferentes etapas del proceso” coincidiendo con nosotros que la corrección mediante la ley xxx logra su finalidad de garantizar una mejora en la administración de justicia, corrigiendo la situación anterior del nuevo texto mediante la cual la incompetencia determinaba la nulidad de todo lo actuado y la conclusión del proceso (valioso tiempo y recursos del litigante y el estado perdidos), largo error que se supera mediante la modificatoria que por fin en este aspecto permite una efectiva tutela jurisdiccional, disponiendo que el proceso se remita al órgano jurisdiccional competente, previniendo que el nuevo juez a quien se le derivó el proceso a su vez, si se considera incompetente lo remita a quien le corresponda; por lo que bajo ninguna razón de incompetencia se declarará la nulidad del proceso.

CONCLUSIONES

- 1) Con respecto a la incidencia de los artículos 35, 36 del CPC mediante la LEY 30293 en los procesos civiles del distrito Fiscal de La Libertad – 2015, apreciamos en las estadísticas (tablas) que se aprecia, el que nadie los considero no influyentes (0%), un 50% lo consideró medianamente influyente (12 entrevistados) y un 50% lo considero influyente.
- 2) Con respecto a la finalidad de la Ley 30293, la celeridad debido a la modificación de los artículos 35, 36 del CPC mediante la LEY 30293 en los procesos civiles del distrito Judicial de La Libertad – 2015, nuestros resultados muestran que un 4% (1 participante) considera que no es influyente, un 38% (9 participantes) consideraron que es medianamente influyente y un 58% (14 participantes) consideraron que si es influyente.
- 3) Se logró demostrar que Existe relación entre la modificación de los artículos 35, 36 del CPC mediante la LEY 30293 y la celeridad procesal en el distrito Judicial de La Libertad – 2016 con un nivel de intensidad media $X^2 = 0.561$, $p = 0.04$

RECOMENDACIONES

Con respecto a los problemas que acarrea la incidencia de los artículos 35 y 36 modificados mediante la ley 30293, dado que, según las estadísticas, un 50% lo considero medianamente influyentes, esta investigación nos lleva a tener la facultad para poder recomendar, que se investigue cuales son los factores por lo que un importante porcentaje lo considera así, a pesar de que un porcentaje igual los considera que si son influyentes, con la finalidad que para todos los litigantes estos artículos sean plenamente influyentes, que era el objeto de la ley

Con respecto al otro punto, esto es la celeridad procesal, que era la finalidad de la ley, se requiere mayor difusión, para su conocimiento y el uso adecuado de esta figura, por los abogados litigantes.

Por último, y no menos importante, se exhorta a los magistrados, tratar de hacer el mayor uso posible de esta figura, que ha sido minimizada, y relegada, pero que creemos tendría gran impacto.

Referencia bibliográfica

Libros

- ORTELLS RAMOS, Manuel. Derecho Procesal Civil. Tercera edición. Aranzadi: Navarra, 2002.
- QUINTERO, Beatriz y PRIETO, Eugenio. Teoría General del Proceso. Temis: Bogotá, 2000.
- DEVIS ECHAN DÍA, Hernando. Teoría General del Proceso. Editorial Universidad Buenos Aires, 1997.
- ROCCO, Ugo. Tratado de Derecho Procesal Civil. Temis: Bogotá- De palma: Buenos Aires, 1983. Tomo 11.
- AGUIRRE GODOY, Max. (1981). Introducción al estudio del derecho procesal civil.
- COUTURE. Eduardo J. Fundamentos del Derecho procesal civil. 2005
- ESPINOZA ESPINOZA, J. (2007). Derecho de la responsabilidad civil. Lima: Gaceta Jurídica.
- FIGUEROA YAVAR, Juan Agustín y Morgado San Martín, Erika (2013): Jurisdicción, competencia y disposiciones comunes a todo procedimiento. Santiago de Chile: Legal Publishing Chile - Thomson Reuters.
- Gordillo, M. (1998). Derecho Procesal Civil Guatemalteco. Guatemala: Ediciones Jurídicas.
- Guasp, J. (1962). Derecho procesal civil. Madrid- España: Instituto de Estudios Políticos.
- Hernández, Fernández, & Baptista. (2013). . Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill.
- Vescovi, E. (2006). Teoría general del proceso,. Bogotá: Temis.
- CARNELUTTI, Francesco. Instituciones del proceso civil. EJE: Buenos Aires, 1959.
- CARLOS, Eduardo B. Introducción al estudio del derecho procesal. EJE: Buenos Aires, 1959.
- SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel. "Nulidad procesal". En: Revista Peruana de Derecho Procesal. N° 2.
- LUISO, Francesco. Diritto processua/e civile. Tomo I. Giuffré: Milán, 1997.
- CALAMANDREI, Piero. Instituciones de Derecho Procesal Civil según el nuevo Código. Tomo 11. EJE: Buenos Aires, 1962.

Tesis

- Chávez Alférez, C., Otazú Macedo, M., & Oquiche Ávila, S. (2016). Modificatorias al Código Procesal Civil – Ley N° 30293 . Arequipa - Perú: Tesis Universidad Católica San Pablo.
- Cortez Martínez, R. H. (2011). Las excepciones en derecho procesal civil salvadoreño. El Salvador: Tesis Universidad de El Salvador .
- Cortez Martínez, R. H. (2011). Las excepciones en derecho procesal civil salvadoreño. El Salvador: Tesis Universidad de El Salvador .
- Deras, E. (2011). Demanda defectuosa. Guatemala: Tesis Universidad de San Carlos de Guatemala.
- Oliva Vásquez Francisco Evelio. Falta de positividad del artículo 61 del decreto Ley 107, en cuanto a la designación del juzgado en los escritos iniciales y la desmedida interposición de excepciones de demanda defectuosa por parte de los demandados en la ciudad de Guatemala p. 26. 2008 Tesis Universidad de San Carlos de Guatemala

Revistas

- Sáez Martin, J. (2015). Los elementos de la competencia jurisdiccional. Revista de Derecho de Coquimbo, 22(1). Obtenido de <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-97532015000100014>

Páginas Web

- Muñoz, Pérez, Taiman y Olaya, Ley N° 30293 - ley que modifica diversos artículos del código procesal civil a fin de promover la modernidad y la celeridad procesal, Lex Data Procesal Vol 2 (1) p.5. 2015 <http://www.munizlaw.com/productos/Lex-Data/ProcesalCivil/2015/Lex%20Data%201-2015.html>
- Priori Posada Giovanni, “La reciente reforma del proceso civil peruano ¿realmente tendremos procesos más rápidos?”, Ius 360 / Ius Veritas febrero, 2015. P17

<http://ius360.com/publico/procesal/la-reciente-reforma-del-proceso-civil-peruano-realmente-tendremos-procesos-mas-rapidos/>

Jurisprudencia

- Cas. N° 1027- 2008-Ancash, Primera Sala Civil Permanente Suprema, 16 de abril 2008).
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, 30 de mayo de 1999. "Castillo Petruzziiy otros vs. Perú". Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_52_esp.pdf [fecha de visita 22 de diciembre de 2014] p. 44
- Exp. N3 35-95-Lima, Editora Normas Legales, Tomo 249, Febrero 1997, Trujillo-Perú, pp. A.23-A.24)
- Exp. N3 4105-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 295).
- Exp. N3 4301-98, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 294).
- Exp. N3 56-99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 368).
- Exp. N3 715-95-Ancash, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 521-522)
- Exp. N3 889-99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 297).
- Exp. N3273-95-Lambaye- que, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias Supremas Civiles, Legrima, 1997, pp. 512-513).
- Exp. N9 13-99, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 230).
- Exp. N9 213-97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 276).
- Exp. N9 304-97,- Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 329)
- Exp. N9 382-7-97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 255).

- Exp. N9 59856-97, Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 5, Gaceta Jurídica, p. 90).
- Exp. N9 607-7-97, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, pp. 300-301)

Normas Jurídicas

- Ley N° 28544, Ley que modifica el C.P.C. respecto de las competencias.
- Ley 30293, Ley que modifica diversos artículos del Código Procesal Civil a fin de promover la modernidad y la celeridad procesal.
- Código Procesal Civil de 1993.

ANEXOS

Cuestionario de Beneficio de modificación de los artículos 35 y 36 mediante la ley 30293.

Estimado magistrado, la presente encuesta es de carácter exclusivamente académico.

A continuación se le presentan 10 proposiciones; Responda usted según su experiencia en qué medida es cierto estas proposiciones.

- Total desacuerdo - desacuerdo - indiferente - acuerdo - Total
acuerdo

		Total	desacuerdo	indiferente	acuerdo	Total acuerdo
1	La modificatoria de los artículos 35 y 36 del CPC por la ley 30293 se han reducido la interrupción procesos que tenían vicio de incompetencia o que perjudicaba el proceso					
2	Con la modificatoria de los artículos 35 y 36 del CPC por la ley 30293 la figura de la incompetencia ha mejorado su eficacia u propósito					
3	La modificatoria de los artículos 35 y 36 soluciona el problema de tener que reiniciar proceso por aspectos de incompetencia y con ello el Poder Judicial en lugar de solucionar una causa y satisfacer al litigante, tenían una nueva demanda.					
4	La modificatoria de los articulo 35 y 36 contribuye en forma global a la disminución de la carga procesal, porque al solucionarla se satisface a los litigantes y se evita que vuelvan a iniciarla					
5	la incompetencia en el sentido del derecho a la tutela por jurisdiccional efectiva y específicamente el derecho de obtener sentencia en plazo razonable					

6	Con la modificatoria de los artículos 35 y 36 del CPC por la ley 30293 mejora el uso eficiente de los jueces especialistas y por ende la adecuada resolución de las causas					
7	Considera que la modificatoria de los artículos 35 y 36 del CPC por la ley 30293 se incrementa la satisfacción de los litigantes y el desempeño del poder judicial.					
8	En su experiencia como Juez, considera usted que la modificatoria de los art 35 y 36 por la Ley 30293 pudo haber sido mejor o que el texto es mejorable					
9	En su experiencia como Juez, considera usted que la modificatoria de los art 35 y 36 por la Ley 30293 si bien es cierto evita la interrupción del proceso, contribuye a la celeridad procesal, puede afectar la calidad del fallo judicial, la solución de la pretensión					
10	la modificatoria de los art 35 y 36 por la Ley 30293 contribuye impedir la afectación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.					

FICHA TÉCNICA

Dimensiones	Ítem	Rango
Procesos actuados	(3) 1,2,3	5 - 15
Simplificación procesal	(3) 4,5,6	5 - 15
Reducción de carga procesal	(3) 7,8,9	5 - 15
Total	9	15-45

Categorización de la variable

Categoría	%	Rango de puntaje
-----------	---	------------------

No influyente	$< = 50 \%$	0 - 22.5
Medianamente influyente	+ 50 - $\leq 75 \%$	22.5 - 33.75
Influyente	+ 75 - 100 %	33.75 - 50

Cuestionario de Beneficio a la celeridad procesal mediante la ley 30293.

Estimado magistrado, la presente encuesta es de carácter exclusivamente académico.

A continuación se le presentan 10 proposiciones; Responda usted según su experiencia en qué medida es cierto estas proposiciones.

- Total desacuerdo - desacuerdo - indiferente - acuerdo - Total
acuerdo

Agradecemos por anticipado su colaboración.

Sobre el tiempo de proceso		Total	desacuerdo	indiferente	acuerdo	Total
1	En su experiencia desde la modificación del artículo 35 del CPC mediante la Ley 30293 el tiempo de proceso se ha hecho más predecible en la etapa postulatoria					
2	En su experiencia desde la modificación del artículo 35 del CPC mediante la Ley 30293 el tiempo de proceso se ha hecho más predecible en la fase de proceso					
3	En su experiencia desde la modificación del artículo 35 del CPC mediante la Ley 30293 el tiempo de proceso se ha hecho más predecible en la fase de sentencia					
Sobre la celeridad procesal						
4	En su experiencia desde la modificación del artículo 35 del CPC mediante la Ley 30293 ha impactado muy positivamente la celeridad en la etapa postulatoria					
5	En su experiencia desde la modificación del artículo 35 del CPC mediante la Ley 30293 ha impactado muy positivamente la celeridad en la fase de proceso					

6	En su experiencia desde la modificación del artículo 35 del CPC mediante la Ley 30293 ha impactado muy positivamente la celeridad en la fase de sentencia					
Sobre la calidad de justicia						
7	En su experiencia con la modificación del artículo 35 del CPC mediante la ley 30293 se ha mejorado la calidad del proceso civil					
8	Considera que con la ley 30293 mejorara sustancialmente la imagen del Poder Judicial por su alto impacto en el proceso civil					
9	(Considera que la ley 30293 en lo que refiere a la modificación del art 35 del CPC NO ES TRASCENDENTE, pudo hacerse mejor					